SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SEIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS FERNANDO ANTERO VALLE Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la misma.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se da a conocer el orden del día, que se sujetará la sesión ordinaria número veinte correspondiente Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; **I.-** Lista de presentes; **II.-** Declaración del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; **III.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la Sesión Pública Ordinaria número diecinueve celebrada el día 30 de julio de 2014; **IV.-** Síntesis de comunicaciones; **V.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa de Ley con proyecto de decreto, por medio del cual se crea la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima; **VI.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos constitucionales, por medio del cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima; **VII.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal para que se otorgan pensión por jubilación a los CC: Mario Ribera Beltrán, Jorge López Pérez, Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín Cervantes Venegas. Así mismo se concede pensión por vejez al C. José Luis Armando de la Vega Meillón y Abel Sánchez Pérez; **VIII.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se otorgan pensión por jubilación a los CC. Martín Enrique Michel Ureña y a Francisco Javier Aguilar Muñiz; **IX.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por la que se otorgan pensión por jubilación a las CC: Irma Patricia González Gómez, Ma. De Jesús Pulido Guardado, Daría Socorro Contreras Villaseñor, Zenaida Gutiérrez Meraz, Mónica Pérez Santa Ana, Hortensia Vergara Aragón, Eva Elizabeth Delgado Decena, Susana Ramírez Galván, Juana Hernández Horta, Alma Delia Arreola Cruz y Celia Venegas Vizcaíno; **X.-** Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a las iniciativas del Ejecutivo por la que se otorgan pensión por jubilación a las CC. María Elena Flores López, Ana María Leticia Reyes Casian y a Claudia Graciela Terriquez Castillo; **XI.-** Lectura discusión y aprobación en su caso, del acuerdo por medio del cual se declara recinto oficial de esta soberanía el jardín libertad de esta ciudad para que en él se lleve a cabo la Sesión Solemne para Conmemorar que en 1824 se impuso la Categoría de Ciudad a la población de Colima; **XII.-** Asuntos Generales; **XIII.-** Convocatoria a la Próxima Sesión Ordinaria; **XIV.-** Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Está a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la Diputada o el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse, el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado que el orden del día es aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito también a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia para así, verificar el quórum correspondiente.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. A continuación, procedo a pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Le informo a usted Diputado Presidente que nos encontramos 24 de los 25 integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, únicamente con la inasistencia de nuestro compañero Rafael Mendoza Godínez, y esta está justificada conforme a la Ley Orgánica.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Solicito y ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de la sesión correspondiente. En virtud de existir el quórum legal señalado por el Secretario con 24 asistentes y siendo las dos de la tarde con veintinueve minutos del día seis de agosto del año en curso, es que declaro formalmente instalada esta sesión, muchas gracias, pueden sentarse. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número diecinueve celebrada el treinta de julio del presente año.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Diputado Presidente, en virtud de que ya fueron enviadas previamente por medio electrónica el acta de la sesión pasada y la síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII 37 fracción I, 112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta, para proceder únicamente a la discusión y aprobación en su caso del acta y que sea insertada la síntesis de forma íntegramente en el Diario de los Debates.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con la justificación de la Secretaría es que pongo a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario, con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, también tiene la palabra, si así se desea hacerlo el Diputado que le corresponda hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en referencia.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que el acta de referencia fue aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia.

...SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES...

**SESION PÚBLICA ORDINARIA NUMERO VEINTE
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.**

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES

Oficio número TES-035/2014 de fecha 28 de julio del año en curso suscrito por el C. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. José Manuel Dueñas Fuentes, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala, Col., mediante el cual remite las Cuenta Públicas correspondientes a los meses de enero a junio del año actual del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número S-253/2014 de fecha 30 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Profr. Federico Rangel Lozano y Lic. Salvador Cárdenas Morales, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del período comprendido de enero a junio del año 2014 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número D.G. 132/2014 de fecha 18 de marzo del presente año, suscrito por el C. Ing. Francisco Rafael Fajardo Cuellar, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecomán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre del año 2014 del citado organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número PM/0159/2014 de fecha 31 de julio del año actual, suscrito por la C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre del año 2014 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número 537/2014 de fecha 31 de julio del año en curso, suscrito por el C. Ing. Héctor Raúl Vázquez Montes, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera del Primer Semestre del año 2014 del citado municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número 063/2014 de fecha 31 de julio del año actual, suscrito por el C. LAE. Enrique A. González Contreras, Director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Coquimatlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero del año 2014 de ese organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número 173/2014 de fecha 25 de julio del presente año, suscrito por la C. Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Semestral correspondiente a los meses de enero a junio del año 2014 de dicho

municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número 172/2014 de fecha 25 de julio del año en curso, suscrito por la C. Tec. Lidia Yoseline Carriedo Morales, Tesorera del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., por medio del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del año actual de ese municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Circular número 28/2014 de fecha 10 de julio del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de la cual comunican que con esta fecha llevaron a cabo la elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso comprendido del 16 de julio al 31 de agosto del año actual.- Se toma nota y se archiva.

Circular número 29/2014 de fecha 15 de julio del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por medio de la cual informan que con esta fecha clausuraron el Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente a su Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva.

Circular número 30/2014 de fecha 15 de julio del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esta fecha declararon formalmente instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso comprendido del 16 de julio al 31 de agosto del año actual.- Se toma nota y se archiva.

Oficio número SHA/111/2014 de fecha 31 de julio del año en curso, suscrito por el C. M.C. Jorge Nava Leal, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., a través del cual remite el Informe de Avance de la Gestión Financiera correspondiente al Primer Semestre del Ejercicio Fiscal del año 2014 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.

Oficio número DGG-607/2014 de fecha 1° de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la cual se emite la Declaratoria de Incorporación del Estado de Colima, al Nuevo Sistema de Justicia Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico interno, como norma procedimental.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes. **Colima, Col., 6 de agosto de 2014.**

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. En el curso del proceso legislativo es que se les pregunta a las señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue enviada oportunamente vía correo electrónico, de no hacerlo así, en el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa que crea la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez.

DIP. PALACIOS RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado Presidente, Diputados Secretarios, compañeros Diputados, público asistente, quiero agradecer aquí la presencia del Lic. Rigoberto Salazar Velasco, Secretario de Desarrollo Social, de la Licda. Ma. Elena González quienes participaron muy arduamente y activamente y al jurídico también, tanto del Congreso como de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes contribuyeron en mucho en esta Ley que hoy presentamos.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

P r e s e n t e.

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, les fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y

Comunidades Indígenas del Estado de Colima y, a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero le fue turnada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley para la Atención y Protección de los Jornaleros Agrícolas en el Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2628/014, de fecha 10 de junio de 2014, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y, de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, presentada por los Diputados Manuel Palacios Rodríguez y, Óscar A. Valdovinos Anguiano y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura.

SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que:

“La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2o reconoce que “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Los pueblos indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana, que requiere especial atención para su desarrollo económico, político, social y cultural, en virtud de su estado de vulnerabilidad frente a la mayoría de la población. Motivo que nos impulsa a buscar la construcción de una cultura de respeto, tanto en sus derechos individuales como los que ejercen en comunidad.

Cabe destacar que estos pueblos indígenas poseen grandes y antiguos patrimonios culturales que los han identificado como tales a lo largo de su existencia. Sus conocimientos tradicionales y su comprensión del manejo de los ecosistemas son contribuciones valiosas. No obstante ello, estos pueblos figuran al mismo tiempo entre los grupos más vulnerables, marginados y desfavorecidos de la sociedad. Siendo entonces nuestro deber, lograr que se escuchen sus voces, se respeten sus derechos y se mejore su bienestar.

El tema sobre los derechos indígenas no es exclusivo de nuestro País, por su diversidad mundial, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, se estableció un marco universal de las normas mínimas que deben cumplirse para la supervivencia, la dignidad, el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas del mundo.

Normas que abarcan temas sobre los derechos individuales y colectivos; los derechos y la identidad culturales, los derechos a la educación, la salud, el empleo y el idioma y, se declara ilegal toda discriminación en contra de los pueblos indígenas, además de promoverse la participación plena y efectiva de esas personas en todos los asuntos que les conciernen. También, se asegura su derecho a ser diferentes y a perseguir la realización de sus propias prioridades de desarrollo económico, social y cultural.

En nuestro país, los derechos básicos en materia indígena los encontramos plasmados en los artículo 1o y 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primero de ellos, en virtud del reconocimiento a la observancia de la normatividad internacional de la cual el Estado Mexicano sea parte y, en el segundo artículo, en su párrafo quinto establece que el reconocimiento de los pueblos y

comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, en las cuales se tomarán en cuenta los principios generales establecidos en la Carta Magna, así como criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico; esto conlleva que las entidades identifiquen y analicen las comunidades existentes para determinar su presencia, así como los esfuerzos a realizar para encauzar el desarrollo integral de las mismas.

Lo anterior obliga a las entidades federativas a observar las disposiciones de la Constitución Federal y de los tratados internacionales de los cuales el país forme parte, con el objeto de que las legislaturas estatales legislen en lo relativo a los derechos indígenas con un enfoque de desarrollo y vinculación social, fijando principios mínimos ya establecidos en la Carta Magna, con la libertad de adicionar otros más de conformidad a las características propias de cada entidad que se ajusten a la realidad social imperante.

Es importante mencionar que los derechos indígenas no son exclusivos de las comunidades indígenas, sino que éstos son inherentes a las personas que ostentan dicha calidad, lo que conlleva al reconocimiento y respeto de sus derechos fuera de sus comunidades e incluso, fuera del territorio nacional, en virtud de los tratados internacionales que sobre la materia México es parte.

Ello, faculta a nuestro País a velar por los derechos de los indígenas nacionales en otros países e, igualmente, tiene la obligación de respetar a aquellos indígenas extranjeros que se encuentren en el territorio mexicano.

Sin embargo, más allá de la normatividad existente en materia indígena, es importante que la propia sociedad haga conciencia de una cultura de respeto de los derechos humanos, los cuales se encuentran legislados desde la misma Constitución Federal, cultura que debe surgir a partir de la formación básica, con el objeto de lograr una correcta convivencia social con un enfoque de desarrollo integral de cada uno de los grupos poblacionales de que se compone la sociedad mexicana.

Resulta necesaria esta conciencia social, ante las lamentables violaciones que en sus derechos como todo mexicano les son consagrados en la Constitución Federal, en su título primero, capítulo primero, de los derechos humanos y sus garantías; siendo que al igual que cualquier persona tiene derecho a condiciones laborales dignas, a acceder a los servicios educativos, a servicios de salud adecuados, a los diferentes servicios públicos y privados.

Como vemos, hay mucho donde seguir trabajando para lograr la inclusión social plena de los diferentes sectores poblacionales existentes, entre ellos los indígenas, para lograr un desarrollo armónico, donde impere el respeto a la persona misma, siendo este la base para los demás derechos.

Al efecto, destacamos la celebración de este Foro Estatal "DERECHOS INDÍGENAS, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN INDÍGENA", organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado en el mes de marzo del año en curso, en el cual se ha destacado los retos a que nos enfrentamos, como lo es la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y, lo relativo a la migración indígena dentro del mismo territorio nacional, fenómeno que se ha acelerado con motivo de la movilidad humana en busca de mejores condiciones de vida, incrementando con ello la densidad poblacional indígenas en entidades donde originalmente no existía una presencia importante, como es el caso de nuestro Estado, que en los últimos años hemos experimentado gran presencia de población indígena perteneciente a otros estados como es el caso de Guerrero; circunstancia que debe motivar a los legisladores para adecuar los instrumentos legales y establecer los mecanismos de su

identificación que permita a las autoridades estatales velar por sus derechos mínimos establecidos en el artículo 2o de la Constitución Federal.

En cuanto a la situación legislativa que impera en nuestro Estado, mediante Decreto 520, de fecha 09 de mayo de 2009 se publicó la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, para reconocer y regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Con motivo de la evolución social, el 14 de julio de 2012, mediante Decreto 545, se reformó la fracción XIII, del artículo 1o de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para redefinir las bases de organización y regulación de los derechos y obligaciones de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad, de conformidad con la Constitución Federal. Con el objeto de hacer un reconocimiento extensivo de los derechos de los pueblos indígenas; lo que trajo como consecuencia que se llevaran a cabo reformas a la ley secundaria de la materia, las cuales se publicaron el 15 de septiembre del mismo año, para establecer en esta el alcance normativo que tendría la reforma constitucional local antes mencionada, así como el reconocimiento de los pueblos y comunidades consideradas como indígenas en el Estado como un derecho básico para la consecución de sus demás derechos.

Igualmente, en esa misma fecha se determinó aprobar el Decreto 614 que contiene el Catálogo de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Colima, con el objeto de otorgarles el carácter de pueblos o comunidades indígenas a las que se distinguen por ser aquellas que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual de la entidad al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o, parte de ellas.

Ahora es facultad nuestra generar las reformas necesarias para seguir impulsando políticas que coadyuven a la protección y defensa de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, así como de aquellos que por diversas circunstancias se encuentran de manera transitoria en la entidad; procurando en todo momento se respeten los derechos de los indígenas sin que sean objeto de discriminación alguna, sino que su identificación nos permita coadyuvar con ellos para alcanzar el desarrollo que sus pueblos y comunidades demandan para vivir en un estado de igualdad de oportunidades.”

TERCERO.- Que mediante oficio número 0655/013, de fecha 17 de abril de 2013, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero, la la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley para la Atención y Protección de los Jornaleros Agrícolas en el Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura.

CUARTO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que:

“Se calcula, según datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas 2009, que existen en México un total de 2,040,414 jornaleros agrícolas, de los cuales 19.5% son jornaleros agrícolas migrantes y 80.5% son jornaleros agrícolas locales, para los que es impostergable la defensa de sus derechos humanos y garantías laborales, educativas, sociales, económicas y políticas, en todo nuestro país, pero principalmente en el Estado de Colima.

Todos ellos, los jornaleros agrícolas, ya sea que provengan de otras entidades de la República (jornaleros agrícolas migrantes) o se desplacen en el interior del estado de Colima (jornaleros agrícolas locales), conforman un grupo poblacional catalogado como uno de los de mayor vulnerabilidad, exclusión

social, desprotegido en sus derechos y condiciones de trabajo e invisibilidad en el debate público y político, dejando sus beneficios y servicios sólo al discurso mediático.

Es públicamente conocido que los jornaleros agrícolas carecen del acceso a servicios de salud, seguridad social, prestaciones de ley, vacaciones con goce de sueldo, protección de sus derechos laborales como la jornada máxima de 8 horas al día, guarderías, permisos por incapacidad física o enfermedad, permisos por maternidad o paternidad, jubilaciones o pensiones, seguro por riesgo de trabajo, y de cualquier otro servicio o beneficio, público o privado, al que cualquier otra persona accede.”

QUINTO.- Los integrantes de las Comisiones dictaminadoras, tanto de la iniciativa indicada en el considerando Primero como la correlativa en el considerando Tercero, derivado de su estudio y análisis correspondiente, acordamos dictaminarlas en el mismo documento en virtud del espíritu que persiguen ambas, esto es, buscan regular la situación que viven los jornaleros agrícolas de la entidad, especialmente los que se encuentran en tránsito, los cuales son identificados como indígenas provenientes de otras entidades del país en busca de mejores condiciones de vida. Circunstancia por la que se considera oportuno se regule lo relativo a los jornaleros agrícolas dentro de la nueva Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima por la vinculación que existe con la materia.

Ello queda de manifiesto en la fracción VIII del apartado B, del artículo 2o de la Constitución Federal, donde corresponde de manera concurrente a la Federación, Estados y Municipios promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, mediante el establecimiento de las instituciones y las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades. Agregando que para abatir estas carencias y rezagos que les afectan, se tiene la obligación de:

VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.

Con lo anterior se justifica el interés de las comisiones en dictaminar ambas iniciativas en el mismo documento con el fin de concentrar en un mismo cuerpo normativo las acciones que han de emprenderse a favor de los pueblos y comunidades indígenas, así como de sus integrantes cuando éstos se encuentren en tránsito en otras entidades del país realizando trabajos en el campo donde se expongan a la violación de sus derechos humanos.

SEXTO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa objeto del presente Dictamen, los integrantes de las Comisiones que dictaminamos ponderamos la misma, siendo que los pueblos y comunidades indígenas de nuestro Estado representan un importante activo cultural y social para la entidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a nuestro país como una Nación pluricultural, esta pluralidad se debe a los pueblos indígenas, quienes nunca han dejado sus tierras, sus patrimonios culturales, sus propiedades, sus reconocimientos y sabidurías, así como sus esfuerzos en el trabajo.

Como se comenta, desde la Constitución Federal, México es reconocido como una Nación multicultural y multiétnica que se sustenta en sus pueblos indígenas, lo cual conlleva grandes compromisos en todos los niveles.

Ante ello, nos damos cuenta de que nuestro país posee una gran riqueza cultural que se manifiesta tanto en el origen de los pueblos como en la variedad de lenguas y costumbres que definen en su conjunto nuestra identidad nacional, por lo que frente a la discriminación que desde tiempos de la conquista sufrieron las comunidades indígenas, nuestra Nación vive esfuerzos sin precedentes para sumarlas al desarrollo y garantizar su acceso a los recursos naturales que les corresponden.

Actualmente las condiciones son diferentes, se observa gran interés, conciencia y participación de la sociedad civil en coordinación con los diversos órdenes de gobierno para terminar con aquella época de exclusión social que vivieron los indígenas de nuestro país, situación que los mantuvo rezagados al desarrollo.

El reconocimiento constitucional ha sido uno de los primeros pasos para empezar a romper las barreras de la discriminación de los pueblos indígenas; a través de ello, se han venido alcanzando importantes logros en cada una de las entidades del país mediante la generación de normas dirigidas a proteger los derechos de estos pueblos; aclarando que como bien menciona la Constitución Federal, es un derecho inherente de los indígenas, no tanto de los pueblos, por lo tanto, es una obligación de las autoridades reconocer su calidad aun cuando se encuentren fuera de sus pueblos o comunidades.

Asimismo, nuestro Estado no ha sido omiso al respecto, siendo que como bien lo mencionan los iniciadores, mediante Decreto 520, de fecha 09 de mayo de 2009 se publicó la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, para reconocer y regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad.

Sin embargo, somos conscientes de que las sociedades evolucionan y se requieren de instrumentos normativos que resulten aplicables a la realidad que se vive, con el objeto de que se atiendan cada una de las situaciones presentes de conformidad con las demandas sociales. Motivo por el cual determinamos a la iniciativa que se dictamina como viable, siendo que busca regular los derechos de los pueblos y comunidades indígenas con una visión más integradora, donde se busque la participación de todos para eliminar cualquier situación que genere discriminación al respecto.

Esta Comisión destaca el importante trabajo que se llevó a cabo por parte de los iniciadores en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, quien se ha venido destacando de manera importante por el desarrollo integral de las comunidades indígenas presentes en nuestra entidad.

Ese trabajo se vio reflejado en la celebración del Foro Estatal "DERECHOS INDÍGENAS, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN INDÍGENA", organizado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado y el Congreso del Estado en el mes de marzo del año en curso, donde existió una destacada participación de diversas comunidades y pueblos con ascendencia indígena, los cuales aún preservan algunas de las características de los pueblos originarios.

Al respecto, como lo mencionan los iniciadores, la iniciativa tiene gran parte de su sustento en la participación de los indígenas de nuestro Estado en el Foro antes mencionada, quienes han manifestado su deseo de ser reconocidos como tales y que se les incluya dentro del desarrollo estatal sin que sean objeto de discriminación alguna.

Cabe mencionar que del objeto de la presente iniciativa, se busca crear una Ley más integradora, mediante el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima y de las personas que los integran, así como de aquellas que se encuentran en tránsito por el territorio de la entidad. Esto demuestra que no se limita al reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, sino que además busca el reconocimiento de los derechos de los indígenas migrantes, que por diversas circunstancias se encuentran de paso, de manera transitoria o permanente en la entidad.

Partiendo de ello, observamos que dentro del catálogo de comunidades indígenas en nuestro Estado no se limitarán a aquellas que por sus características así se definan, sino también se consideran aquellas que cuentan con presencia indígena, ello, con motivo de los fenómenos de migración de una entidad a otra, o entre las mismas comunidades.

Este fenómeno de migración lo observamos en su afán de buscar mejores condiciones de vida en otras entidades, generalmente en el área de la agricultura, donde en muchas ocasiones son objeto de vejaciones laborales, tanto en sus derechos laborales consagrados por la Constitución Federal y la propia Ley Federal del Trabajo, como en sus derechos de seguridad social.

Otro de los objetivos que se destacan es el relativo a garantizar el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; siendo que estos elementos les otorga parte de su identidad como pueblos indígenas.

Así, se observa de la misma la promoción del respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; con el objeto de preservar la riqueza cultural y natural de nuestros pueblos.

Para mejorar sus condiciones de vida, observamos que parte de su objeto también consiste en establecer las obligaciones de la administración pública estatal y municipal para elevar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su desarrollo a través de partidas específicas en los presupuestos de egresos respectivos.

Basta mencionar que dentro de la iniciativa que se dictamina existe un especial interés por buscar una participación equitativa en la vida interna de las comunidades y pueblos indígenas, a través del impulso a la mujer para que participe activamente en el desarrollo de sus comunidades.

Para lograr el objeto planteado por los iniciadores, se busca la intervención de las autoridades que conforman los órdenes de gobierno del Estado, para generar una política integral en materia indígena, mediante el ejercicio de acciones comunes, buscando siempre el beneficio de la gran mayoría de esta población.

Cabe mencionar que dentro de las acciones implementadas por estas Comisiones y arribar a las conclusiones que se aprecian en el presente Dictamen, se llevaron a cabo reuniones de manera particular con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, así como con representantes de la Delegación Regional Jalisco-Colima de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el objeto de escuchar sus aportaciones como especialistas en la materia de grupos vulnerables e indígenas, respectivamente.

De dichas reuniones resultaron diversas propuestas, entre las que destacan la creación de un Consejo Estatal Indígena como una instancia de consulta y participación de los sectores públicos en coordinación con las comunidades indígenas.

Ante ello, es que consideramos oportuno hacer uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, con el objeto de incluir dentro del presente Dictamen la creación de un Consejo Estatal Indígena, el cual funcionará como una instancia de consulta y participación entre los sectores públicos estatales con los representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, con el objeto de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

Su creación se considera importante por estas Comisiones en virtud de que en el seno del Consejo se podrán generar políticas integradoras, que incidan en el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

Ante el cúmulo de pueblos y comunidades que se reconocen en la Ley que se dictamina, consideramos oportuno que solo participen cinco indígenas de diferentes comunidades quienes representen los intereses de todos en el Consejo, los cuales se elegirán por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, mediante los mecanismos de selección que se establezcan en el propio reglamento.

Asimismo, para garantizar el pleno acceso a la justicia, se considera oportuno otorgarle la atribución a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de gestionar la búsqueda de intérpretes cuando algún indígena sea sujeto a algún proceso jurisdiccional, previa petición del órgano jurisdiccional correspondiente, preservando así sus derecho al debido proceso.

Dentro de las mismas atribuciones conferidas por el citado artículo 130, consideramos necesario hacer un ajuste a los pueblos y comunidades mencionadas en el artículo 3 de la iniciativa, de conformidad a los resultados obtenidos del Foro, así como de los datos estadísticos proporcionados por el INEGI y, de observaciones que al respecto nos hizo llegar la Delegación Regional Jalisco-Colima de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Ajuste que se acepta, siendo que por razón de los indicadores sociodemográficos presentes en estas comunidades, como lo es el tamaño de la población, la educación, los factores económicos, la diversidad cultural (habla de lengua indígena y religión), y el bienestar (características de la vivienda) de las mismas, nos motiva para dejar únicamente aquellas que si bien no conservan en su totalidad sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sí conservan algunas de ellas y, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 2o de la Constitución Federal sí se les puede considerar como pueblo o comunidad indígena, debido a que históricamente los municipios que conforman el territorio del Estado son descendientes de pueblos indígenas.

Los integrantes de las comisiones dictaminadoras, estamos seguros que la aprobación de esta Ley permitirá seguir impulsando la identidad, cultura, tradiciones, usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas del Estado; trayendo consigo condiciones para una vida digna, mediante la procuración libre y autónoma de su desarrollo económico, social y cultural a partir del uso libre de sus recursos.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba crear la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, para quedar como sigue:

LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE COLIMA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, emitida bajo los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales en materia indígena; es reglamentaria del primer párrafo y de la fracción XIII del sexto párrafo del artículo 1º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de aplicación y observancia general en todo el territorio del Estado.

Artículo 2.- Esta Ley tiene por objeto:

- I. R
econocer los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Colima y de las personas que los integran al tener la condición de indígenas, así como de aquellas que se encuentran temporal o permanentemente establecidas o en tránsito por el territorio de la entidad;
- II. G
arantizar el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia de las comunidades indígenas, en su calidad de entidades de interés público;
- III. P
romover el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; y
- IV. E
stablecer las obligaciones de la administración pública estatal y municipal para elevar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su desarrollo a través de partidas específicas en los presupuestos de egresos respectivos.

Artículo 3.- El Estado de Colima tiene una población étnica plural sustentada en sus pueblos indígenas; por ello, esta Ley reconoce y protege, de manera enunciativa y no limitativa, el carácter de pueblos y comunidades indígenas; así como aquellos con presencia indígena en la entidad, a los siguientes:

- I. E
n el Municipio de Armería:
 - a) C
ofradía de Juárez;
 - b) C
uyutlán;
 - c) R
incón de López;
 - d) A
ugusto Gómez Villanueva (Coalatilla);

e)		L
	os Reyes; y	
f)		P
	eriquillos.	
II.		E
	n el Municipio de Colima:	
a)		P
	iscila;	
b)		T
	inajas;	
c)		P
	uerta de Ánzar;	
d)		E
	l Amarradero;	
e)		L
	as Guásimas;	
f)		A
	catitán; y	
g)		E
	stapilla.	
III.		E
	n el Municipio de Comala:	
a)		S
	uchitlán;	
b)		C
	ofradía de Suchitlán;	
c)		L
	aguna Seca;	
d)		Z
	acualpan;	
e)		L
	a Nogalera;	
f)		P
	intores Uno;	
g)		P
	intores Dos;	

h)	l Remudadero;	E
i)	la Becerrera;	L
j)	el Cerezo San Antonio;	N
k)	el Campesino Cuatro; y	C
l)	las Lagunitas.	L
IV.	en el Municipio de Coquimatlán:	E
a)	la Laguna Zarca (Ejido);	A
b)	el Común;	A
c)	el Algodonal;	E
d)	el Cerro de Piedra;	C
e)	el Chical; y	E
f)	la Sidra.	L
V.	en el Municipio de Cuauhtémoc:	E
a)	la Hacienda;	C
b)	la Huacalera;	Q
c)	el Cóbano;	E
d)	la Cruzada;	A
e)	San Joaquín; y	S
f)	el Trapiche.	E

VI.		E
	en el Municipio de Ixtlahuacán:	
a)	Las Conchas;	L
b)	Cueva de la Virgen;	A
c)	La Presa;	L
d)	El Capire;	E
e)	La Amala;	T
f)	Ixtlahuacán;	I
g)	San Jacinto;	Z
h)	San Jacinto;	C
i)	San Jacinto;	C
j)	Las Trancas;	L
k)	San Jacinto; y	J
l)	San Jacinto.	P
VII.		E
	en el Municipio de Manzanillo:	
a)	San Jacinto de Miraflores;	C
b)	San Jacinto de Abajo;	E
c)	San Jacinto;	E
d)	San Jacinto;	C
e)	San Jacinto;	E

- f) ampos; C
- g) a Floreña; L
- h) anoas; C
- i) eladero de los Otates; V
- j) uizcolote; H
- k) omas de Ávila Camacho; L
- l) l Llano de la Marina; y E
- m) iramar. M

VIII. n el Municipio de Minatitlán: E

- a) a Loma; L
- b) l Terrero; E
- c) gua Salada; A
- d) an Antonio; S
- e) anchitos; R
- f) enito Juárez (el Poblado); B
- g) as Pesadas; L
- h) l Platanar; E
- i) l Sauz; E
- j) lan de Méndez. P

k)		R
	astrojitos; y	
l)		P
	latanarillo.	
IX.		E
	en el Municipio de Tecomán:	
a)		C
	cerro de Ortega;	
b)		C
	hacienda de Hidalgo (Laguna de Alcuzaque);	
c)		C
	hacienda de Morelos;	
d)		C
	colonia Ladislao Moreno;	
e)		C
	hacienda;	
f)		M
	hacienda;	
g)		C
	hacienda;	
h)		N
	hacienda Caxitlán; y	
i)		T
	hacienda.	
X.		E
	en el Municipio de Villa de Álvarez:	
a)		E
	hacienda Carrizal	
b)		E
	hacienda Mixcuate;	
c)		E
	hacienda Naranjal	
d)		N
	hacienda Naranjal;	
e)		P
	hacienda;	
f)		P
	hacienda Nuevo;	

g) a Lima; y L

h) uluapan. J

Diputado Presidente que me permitas que la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez continúe con la lectura.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Palacios se le cede el uso de la voz a la Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RAMIREZ. Buenos días.

IX.En el Municipio de Tecomán:

j) erro de Ortega; C

k) ofradía de Hidalgo (Laguna de Alcuzahue); C

l) ofradía de Morelos; C

m) olonia Ladislao Moreno; C

n) hanchopa; C

o) adrid; M

p) allejones; C

q) uevo Caxitlán; y N

r) ecolapa. T

X.En el Municipio de Villa de Álvarez:

i) l Carrizal E

j) l Mixcuate; E

k) l Naranjal E

l) uevo Naranjal; N

- m) icachos; P
- n) ueblo Nuevo; P
- o) a Lima; y L
- p) uluapan. J

Los grupos o personas indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren de paso, permanezcan de manera temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, perteneciente a cualquier otro pueblo o comunidad indígena del país, podrán acogerse a esta Ley, sin detrimento de sus usos y costumbres.

Artículo 4.- Esta Ley reconoce y protege las normas de organización interna de los pueblos y comunidades indígenas asentados en el territorio del Estado, tanto en sus relaciones familiares, vida civil, comunitaria y en lo general, en las que se relacionan con la prevención y resolución de conflictos en las mismas comunidades, sujetándose a los principios generales de la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Local, respetando los derechos humanos y de manera relevante la integridad y dignidad de las mujeres.

Artículo 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

- I. **Autonomía:** A la expresión en la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas asentados en territorio del Estado, en concordancia con el orden jurídico vigente; A
- II. **Autoridades Estatales:** Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Local y en la legislación vigente en la entidad; A
- III. **Autoridades Municipales:** Aquellas que están expresamente reconocidas en la Constitución Local y en la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; A
- IV. **Autoridades Tradicionales:** Aquellas que los pueblos indígenas reconocen de acuerdo a sus sistemas normativos internos derivado de sus usos y costumbres, siempre que actúen en pleno respeto a las legislación vigente; A
- V. **Comisión de Derechos Humanos:** A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; C
- VI. **Comunidades indígenas:** Al conjunto de personas que forman una o varias unidades sociales, económicas y culturales, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres; C
- VII. **Consejo Estatal Indígena:** Al Consejo Estatal Indígena; C

- VIII.** **Constitución Federal:** A la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; **C**
- IX.** **Constitución Local:** A la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; **C**
- X.** **Derechos Humanos:** A las facultades y prerrogativas que el orden jurídico federal y estatal vigente otorga a todo hombre o mujer por el sólo hecho de ser personas, independientemente de que sea o no integrante de un pueblo indígena; **D**
- XI.** **Discriminación:** A toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra, tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de oportunidades de los individuos. **D**
- XII.** **Estado:** Al Estado Libre y Soberano de Colima; **E**
- XIII.** **Garantías Sociales:** A las facultades y prerrogativas de naturaleza colectiva que el orden jurídico mexicano reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, en los ámbitos político, económico, social, agropecuario, cultural y jurisdiccional, para garantizar su existencia, permanencia, dignidad, bienestar y no discriminación basada en la pertenencia a los pueblos indígenas; **G**
- XIV.** **Justicia indígena:** Al sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las controversias que se suscitan entre los miembros de las comunidades indígenas; así como las formas y procedimientos que garantizan a las comunidades indígenas y a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con las bases establecidas por la Constitución Federal y en su caso la Constitución Local; **J**
- XV.** **Pueblo indígena:** Aquel que descende de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciar la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas; **P**
- XVI.** **Territorio Indígena:** Al espacio apropiado y valorizado por los pueblos indígenas, ya sea de manera simbólica o instrumenta, donde, además practican y desarrollan su vida colectiva, sus actividades económicas, políticas, sociales, culturales y religiosas; **T**
- XVII.** **Secretaría:** A la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; **S**
- XVIII.** **Reglamento:** Al Reglamento de la presente Ley; **R**
- XIX.** **Sistemas normativos internos:** Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter **S**

consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, su organización y sus actividades, que sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos, siempre y cuando no contravengan la Constitución Federal, la Constitución Local, sus respectivas leyes secundarias, ni vulneren los derechos humanos de terceros; y

XX.

U

Costumbres y Usos: A la base fundamental de los sistemas normativos internos que constituyen los rasgos y características de cada pueblo indígena.

Artículo 6.- El Estado deberá asegurar que los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad, y velará por el estricto cumplimiento de la presente Ley.

Artículo 7.- Ninguna persona indígena será discriminada en razón de su condición y origen. La ley sancionará cualquier acción o práctica tendiente a denigrar a los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado por cualquier causa.

Artículo 8.- Queda prohibido todo acto material que implique a la comunidad y pueblo indígena, reacomodos o desplazamientos forzados, con excepción de aquellos que por motivos de emergencia, caso fortuito y desastre natural, sean determinados por la autoridad competente con la finalidad de salvaguardar la salud y bienestar social.

Artículo 9.- La separación de niñas y niños indígenas de sus familias y comunidades queda estrictamente prohibida, con la excepción de ser ordenado por autoridad judicial o ministerial, con las correspondientes reservas de ley.

Artículo 10.- Con el objeto de que les sean respetados sus derechos, las autoridades estatales y municipales, así como cualquier persona, tienen la facultad de denunciar ante las autoridades competentes, los casos que lleguen a su conocimiento en que los trabajadores indígenas laboren en condiciones discriminatorias, desiguales o peligrosas para su salud e integridad física.

Artículo 11.- El Estado, en coordinación con los Municipios con presencia indígena, deberán contar, de manera directa y constante, con comunicación con los representantes de las comunidades y pueblos indígenas, mediante las dependencias públicas que su presupuesto lo permita.

CAPÍTULO II

DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES

Artículo 12.- La aplicación de esta Ley corresponde al Estado y, a los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes deberán asegurar el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

Los indígenas provenientes de cualquier otra entidad de la República Mexicana que transiten, residan temporal o permanentemente dentro del territorio del Estado, podrán acogerse a los beneficios de la presente Ley, respetando sus usos, costumbres y tradiciones de las comunidades y pueblos indígenas de donde sean originarias.

Artículo 13.- Son autoridades responsables a garantizar el cumplimiento de esta Ley:

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría;

I.

E

El Poder Judicial del Estado;

- II. I Poder Legislativo del Estado; E
- III. os Ayuntamientos; y L
- IV. a Comisión de Derechos Humanos del Estado. L

Quedan incluidos dentro de esta clasificación todos los órganos, entidades y dependencias de cada autoridad responsable.

Los Poderes Públicos y demás sujetos obligados tienen la responsabilidad, en sus distintos ámbitos de gobierno y a través de sus dependencias e instituciones, de garantizar el cumplimiento de este ordenamiento; así como de respetar, hacer respetar y proteger los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y a proveer su desarrollo social, económico, político y cultural. Los Poderes Públicos realizarán las adecuaciones legales, institucionales y presupuestales procedentes, para hacer efectivo el cumplimiento de esta Ley.

El incumplimiento a lo dispuesto por el párrafo anterior por parte de las autoridades municipales y poderes públicos, será motivo de las responsabilidades en que incurran los sujetos obligados en los términos prescritos por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y de lo que al respecto prevengan otras leyes en la materia.

Los ciudadanos del Estado y quienes residan provisional o temporalmente en su territorio, quedan obligados a observar y respetar los preceptos de esta Ley.

En todo lo no previsto en esta Ley, regirá de manera supletoria lo dispuesto por la Constitución Federal, los Tratados Internacionales, la Constitución Local y demás legislación aplicable en la materia.

Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría y, en su caso, a los Municipios del Estado con comunidades y pueblos indígenas, así como con presencia de población indígena, a través de sus dependencias y organismos auxiliares:

Garantizar el pleno ejercicio de los derechos que esta Ley reconoce a favor de las comunidades y pueblos indígenas en el Estado;

- I. segurar que los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación vigente otorga al resto de la población de la entidad; A
- II. promover el desarrollo equitativo y sustentable de las comunidades y pueblos indígenas, impulsando el respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y autoridades tradicionales; P
- III. promover estudios sociodemográficos para la plena identificación de los integrantes de los comunidades y pueblos indígenas; P
- IV. llevar a cabo el proceso de selección de quienes habrán de representar a los pueblos y comunidades indígenas dentro del Consejo; y L

V.

L

as demás que señale la presente Ley y otros ordenamientos aplicables.

Artículo 15.- Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:

Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos en la entidad, deberán:

Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y comunidades, debiendo considerar la índole de los problemas que se les planteen tanto colectiva como individualmente;

a) A

adoptar, con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo; y

b) R

reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos.

Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Ayuntamientos donde radiquen territorialmente los pueblos y comunidades indígenas, deberán:

Consultar, y en su caso convocar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

a) P

promover que los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus autoridades o representantes tradicionales, participen libremente en la definición y ejecución de políticas y programas públicos que les conciernan; y

b) C

consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y los correspondientes de los Municipios y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.

Artículo 16.- La Comisión de Derechos Humanos coadyuvará en el respeto absoluto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas en la Estado, así como los integrantes de tales comunidades y los indígenas de otras entidades que se encuentren de paso o permanezcan temporal o permanentemente en esta entidad.

CAPÍTULO III

DEL CONSEJO ESTATAL INDÍGENA

Artículo 17.- Se crea el Consejo Estatal Indígena, como instancia de consulta y participación de los sectores públicos estatales con los representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, con el objeto de orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas en la entidad.

SECCIÓN I

DE LA INTEGRACIÓN

Artículo 18.- El Consejo estará integrado por un Presidente, un Secretario Técnico, Vocales y representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, como a continuación se indica:

- I. E
I Gobernador del Estado, quien será el Presidente del mismo;
- II. E
I Secretario de Desarrollo Social, con la calidad de Secretario Técnico, quien a su vez, tendrá la responsabilidad de suplir al Presidente en su ausencia;
- III. V
ocales:
 - a) E
I Secretario General de Gobierno;
 - b) E
I Secretario de Finanzas y Administración;
 - c) E
I Secretario de Planeación;
 - d) E
I Secretario de Fomento Económico;
 - e) E
I Secretario de Desarrollo Urbano;
 - f) E
I Secretario de Desarrollo Rural;
 - g) E
I Diputado Presidente de la Comisión Legislativa del Congreso del Estado en materia indígena;
 - h) E
I Presidente de la Comisión de Derechos Humanos; y
 - i) E
I Presidente Municipal de cada uno de los diez Ayuntamientos de la entidad; y
- IV. C
inco representantes de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad, electas por la Secretaría mediante los criterios que ella misma designe.

Todos los integrantes del Consejo tienen la obligación de asistir a las sesiones y participar con voz y voto, teniendo siempre el Presidente el voto de calidad en caso de empate. Asimismo, los integrantes previstos en las fracciones II, III y IV de este artículo podrán designar un suplente cada uno, salvo el caso del Presidente, quien será suplido en su ausencia por el Secretario Técnico. Cuando el Secretario Técnico supla en funciones al Presidente, se nombrará dentro de los vocales quien habrá de fungir como Secretario Técnico por esa única ocasión.

Todos los cargos que se desempeñen al interior del Consejo tendrán el carácter de honoríficos.

El Consejo podrá sesionar cuantas veces sean necesarias para el desempeño de sus funciones, procurando celebrar como mínimo dos sesiones por año, una durante los primeros seis meses y la segunda en el segundo semestre del año.

Las sesiones deberán ser convocadas con un mínimo de cinco días hábiles a la fecha de su celebración, con excepción de aquellas que se requieran por extrema urgencia, serán convocadas con un mínimo de dos días hábiles previos a su celebración.

En la celebración de las sesiones el Presidente y el Secretario Técnico podrán invitar a representantes de entidades públicas federales, estatales y municipales, así como a especialistas de instituciones educativas públicas, privadas y estudiosos del tema indígena, cuando los temas a tratar dentro de la sesión correspondiente requieran de la opinión de especialistas en la materia.

SECCIÓN II

DEL FUNCIONAMIENTO

Artículo 19.- El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:

- I.** Aprobar las políticas, lineamientos, reglamentos y demás disposiciones complementarias que coadyuven a regular su funcionamiento, de conformidad con esta Ley;
- II.** Analizar y, en su caso, aprobar el Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de Colima así como sus modificaciones, mediante los lineamientos que al respecto se contengan en el Reglamento;
- III.** Aprobar la celebración de contratos, convenios y acuerdos de colaboración con instituciones y organismos del sector público, social y privado del ámbito, estatal y nacional, para llevar a cabo acciones conjuntas que incidan en el desarrollo de los pueblos indígenas del Estado;
- IV.** Generar la participación integral de los sectores públicos y social del Estado y la Federación para impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas;
- V.** Gestionar ante las instancias públicas correspondientes el financiamiento de programas, proyectos y acciones que fomenten la organización social y coadyuven al desarrollo autosostenido de los pueblos indígenas del Estado;
- VI.** Establecer las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales relacionadas con ellos;
- VII.** Implementar programas de difusión dirigidos a las poblaciones indígenas para dar a conocer las leyes vigentes, el funcionamiento del sistema judicial y el de las instituciones que integran el Estado;
- VIII.** Proponer al Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, la inclusión de nuevos pueblos y comunidades y pueblos indígenas en la presente Ley;
- IX.** Elegir al inicio de la sesión correspondiente, dentro de los vocales, quien habrá de suplir al Secretario Técnico, cuando éste supla en funciones al Presidente; y
- X.** Desarrollar las demás funciones que se desprendan de la presente Ley.

Artículo 20.- Son atribuciones del Presidente del Consejo, las siguientes:

- I. Representar legalmente al Consejo;
- II. Presidir las sesiones, así como elaborar el orden del día correspondiente;
- III. Emitir la convocatoria de la sesión, en conjunto con el Secretario Técnico;
- IV. Elaborar y proponer, en coordinación con el Secretario Técnico, el Reglamento Interior que habrá de regir su funcionamiento;
- V. Firmar los acuerdos y convenios que le autorice celebrar el Consejo, para lograr los objetivos planteados por esta Ley;
- VI. Autorizar a la Secretaría el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Consejo; y
- VII. Las demás que le encomiende el Consejo, así como el Reglamento Interior del mismo.

Artículo 21.- Son atribuciones del Secretario Técnico, las siguientes:

- I. Asistir a las sesiones del Consejo y levantar acta de las mismas;
- II. Suplir al Presidente en su ausencia, ejerciendo todas las atribuciones que le correspondan;
- III. Elaborar, en coordinación con el Presidente, el orden del día correspondiente de las sesiones;
- IV. Participar en coordinación con el Presidente en las convocatorias de las sesiones correspondientes;
- V. Dar a conocer a sus integrantes el orden del día propuesto;
- VI. Participar en la elaboración del Reglamento Interior del Consejo; y
- VII. Las demás que le encomiende el Consejo, así como el Reglamento Interior del mismo.

Artículo 22.- La Secretaría llevará a cabo las determinaciones del Consejo.

CAPÍTULO IV

DE LOS DERECHOS Y CULTURA DE LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

SECCIÓN I

PREVENCIONES GENERALES

Artículo 23.- Para efectos de esta Ley se entiende por comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquéllas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio determinado, que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Dichas comunidades pueden corresponder a cualquiera de las formas de tenencia de la tierra: ejidal, comunal o privada.

Artículo 24.- Esta Ley garantiza el derecho de las comunidades integrantes de los pueblos indígenas, para que en el marco de su autonomía, elijan de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas

tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad respecto de los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía del Estado.

Los integrantes de las comunidades y pueblos indígenas tendrán el derecho de promover por sí mismos o a través de sus autoridades tradicionales, de manera directa y sin intermediarios, cualquier gestión ante las autoridades estatales o municipales, sin menoscabo de sus derechos individuales, políticos y sociales.

Artículo 25.- La identificación y delimitación de la jurisdicción de las comunidades indígenas a que se refiere el presente ordenamiento, se establecerán por las propias comunidades, basándose en los criterios que al efecto determinen las leyes de la materia.

En el caso de que por tal motivo surja alguna controversia, la misma se resolverá en términos de la ley aplicable.

Artículo 26.- El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, se encargará del registro del padrón de las comunidades indígenas del Estado.

SECCIÓN II

DE LA AUTONOMÍA

Diputado Presidente solicito permiso para que el Dip. Noé continúe con la lectura del dictamen.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada, en el uso de la voz el Dip. Noé Pinto de los Santos.

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputada, con su permiso Diputado Presidente, con el permiso de los Diputados Secretarios.

Artículo 27.- Se reconoce la existencia de estructuras de organización sociopolítica y de sistemas normativos internos de las comunidades indígenas, basados en sus usos y costumbres; así como en sus procesos de adaptación a la institucionalidad, que se han transmitido oralmente por generaciones y se han aplicado en su ámbito territorial.

Artículo 28.- En lo general, para efectos de esta Ley, se entiende y se reconoce que el sistema normativo indígena es aquel que comprende reglas generales de comportamiento mediante las cuales la autoridad indígena regula la convivencia, la prevención y solución de conflictos internos, la definición de derechos y obligaciones, el uso y aprovechamiento de espacios comunes, el establecimiento de faltas y la aplicación de sanciones.

Artículo 29.- Las comunidades indígenas en ejercicio del derecho a la libre determinación y autonomía, establecerán las bases y mecanismos para la organización de su vida comunitaria, mismos que serán reconocidos y respetados por las autoridades estatales y municipales, siempre que se ajusten a los principios generales establecidos en la Constitución Federal, la Constitución Local, esta Ley y demás legislación aplicable en la materia.

Artículo 30.- Las comunidades indígenas, con instituciones reconocidas, tendrán pleno reconocimiento de sus actos con las demás autoridades ordinarias estatales y municipales. En el marco de su autonomía y de acuerdo con sus sistemas normativos, las autoridades indígenas tienen la facultad de mandar y hacerse obedecer dentro de los límites territoriales que comprenda su jurisdicción, cuando actúen en ejercicio de sus funciones.

SECCIÓN III

DE LAS AUTORIDADES Y REPRESENTANTES

Artículo 31.- Se reconoce a la Asamblea General como la máxima autoridad de las comunidades indígenas, a través de la cual elegirán, de acuerdo con sus normas y procedimientos, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, regular y solucionar sus problemas y conflictos, y decidir sobre trabajos y el servicio público, es decir, las actividades de beneficio común.

Artículo 32.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerán a las autoridades indígenas elegidas por las comunidades de acuerdo a sus usos y costumbres, como los interlocutores legítimos para el desarrollo de la función gubernamental.

Artículo 33.- En ejercicio del derecho a la autodeterminación, las comunidades indígenas tienen la facultad de elegir a quien las represente ante el ayuntamiento respectivo.

Artículo 34.- La mujer deberá contar con las mismas oportunidades que el varón para el desempeño de las funciones de representación comunitaria. El Estado y los municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia y a través de las dependencias que correspondan, establecerán programas de capacitación para las mujeres indígenas a fin de que estén en condiciones de ejercer ese derecho.

CAPÍTULO V

DE LA JUSTICIA INDÍGENA

Artículo 35.- El Estado reconoce la validez de los sistemas normativos internos de las comunidades indígenas en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la organización de la vida comunitaria y, en general, de la prevención, regulación y solución de conflictos al interior de cada comunidad, siempre y cuando no contravengan la Constitución General de la República, la particular del Estado, ni vulneren los derechos humanos.

Artículo 36.- Para efectos de esta Ley se entiende por justicia indígena, el sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las controversias jurídicas que se suscitan entre los miembros de las comunidades indígenas, o entre éstos y terceros que no sean indígenas; así como las formas y procedimientos que garantizan a las comunidades indígenas y a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con las bases establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular del Estado.

Artículo 37.- La aplicación de la justicia indígena es alternativa a la vía jurisdiccional ordinaria; pero los delitos que se persiguen de oficio y las acciones del estado civil de las personas, quedan reservados al fuero de los jueces del orden común.

A fin de garantizar un amplio acceso a la jurisdicción del Estado en los procesos civiles, penales y administrativos, o en cualquier procedimiento que se desarrolle en forma de juicio, que sea competencia de las autoridades del Estado y en el que intervenga un miembro de algún pueblo o comunidad indígena que ignore el español, dicha persona contará con un traductor bilingüe ya sea oficial o particular, de conformidad a las leyes aplicables. Los jueces, procuradores y demás autoridades administrativas que conozcan del asunto, bajo su responsabilidad, se asegurarán del cumplimiento de esta disposición, pudiendo girar oficio a la Secretaría con el objeto de que coadyuve en la búsqueda de un traductor.

Artículo 38.- El procedimiento jurisdiccional para la aplicación de la justicia indígena, será el que cada comunidad estime procedente de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres; con la sola limitación de que se garanticen a los justiciables, el respeto a sus garantías individuales y derechos humanos, en la forma y términos que prevenga la ley de la materia.

Se reconoce la resolución de sus conflictos a través de sus sistemas normativos de las comunidades, que atenderán en todo momento lo previsto en la Constitución Federal, en la Constitución Local y las leyes de que de ellas emanen; consecuentemente, los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad.

Artículo 39.- La validación de las decisiones de las autoridades indígenas, se hará tomando en consideración la normatividad vigente en el Estado, y en los términos que prevenga la ley de la materia.

Artículo 40.- Sólo se validarán las resoluciones que respeten las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres, y siempre que en el procedimiento respectivo también se hayan respetado tales garantías y derechos.

Artículo 41.- El Juez Auxiliar tendrá como jurisdicción su comunidad o localidad a la que corresponda, y en ejercicio de la misma, atenderá los asuntos internos que le competan conforme a los sistemas normativos de su comunidad y los que le asigne su Asamblea General; resguardará la documentación relativa a los asuntos de su competencia; podrá levantar acta de las diligencias que practique con las formalidades mínimas y a su leal saber y entender; y acudirá en calidad de representante de su población ante las instituciones públicas, sociales o privadas.

Artículo 42.- El Juez Auxiliar fungirá como el certificador del aval comunitario para los asuntos que prevenga la ley.

Toda persona radicada en una comunidad indígena que tenga necesidad de emigrar temporal o permanentemente, podrá acudir ante el Juez Auxiliar a fin de que éste levante un acta en la que se haga constar el mayor número de datos que eventualmente pudieran ser de alguna utilidad para efectos laborales, familiares, administrativos, judiciales u otros; tales como el nombre completo del interesado y de su cónyuge, en su caso, así como el de sus familiares más cercanos; lugar de destino, motivo del viaje, duración aproximada, persona que en su caso la haya contratado laboralmente, y demás que se estimen necesarios.

El Juez Auxiliar estará facultado para expedir las cartas de conocimiento y comprobantes de domicilio, así como para otros fines legales.

Artículo 43.- El Juez Auxiliar contará con colaboradores que le auxilien en el desempeño de sus funciones, de conformidad a la disponibilidad presupuestal que se establezca en los presupuestos estatal y municipales, en su caso.

Artículo 44.- La documentación que suscriba, emita y reciba el Juez Auxiliar, deberá contar con el sello autorizado por la Asamblea General, el cual será registrado por el Municipio, estando exento de cualquier impuesto o pago. El sello del Juez estará resguardado por éste durante el período de función, y deberá entregarlo al sucesor en tiempo y forma. Por ello, ninguna otra autoridad local o municipal podrá tener un duplicado del sello.

CAPÍTULO VI

DE LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

SECCIÓN I

DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

Artículo 45.- Los pueblos indígenas tienen el derecho de manifestar, practicar y enseñar sus propias tradiciones, costumbres, ceremonias o rituales.

El Estado con la participación de las comunidades indígenas, y en coordinación con ellas, a través de las dependencias o instituciones competentes, protegerá y promoverá el respeto y la integridad de los valores, creencias, costumbres, prácticas culturales y religiosas de los pueblos indígenas.

Asimismo, apoyará las propuestas de las propias comunidades para fortalecer las formas mediante las cuales recreen, preserven y transmitan sus valores culturales y conocimientos específicos.

Artículo 46.- En el ámbito de su autonomía, el espacio indígena se definirá de acuerdo a los usos y costumbres de cada comunidad indígena. El Estado respetará, protegerá y preservará los lugares utilizados por las comunidades indígenas para realizar ceremonias, rituales, danzas, peregrinaciones o alguna otra manifestación cultural.

Artículo 47.- De conformidad con las disposiciones de la materia, el Estado protegerá y preservará el patrimonio cultural e histórico propio de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente cuando éste coincida con los espacios indígenas.

SECCIÓN II

DE LA EDUCACIÓN Y LENGUAS INDÍGENAS

Artículo 48.- Son obligaciones del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y/o en forma coadyuvante:

- I. I
impulsar políticas específicas en el ámbito cultural, a través de los organismos educativos y culturales de la administración pública, promoviendo entre los integrantes de las comunidades indígenas la generación de espacios con sus recursos propios y financiamiento privado para la preservación, regulación y desarrollo de sus culturas indígenas;
- II. E
establecer mecanismos de coordinación para que conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, se promueva el desarrollo de las actividades e instituciones de cultura, recreación y deporte indígenas;
- III. E
establecer en los planes y programas de estudios oficiales, contenidos que permitan generar un conocimiento de las culturas indígenas autóctonas de la entidad, que describan y expliquen la cosmovisión indígena, su historia, sus formas de organización, sus conocimientos y prácticas culturales;
- IV. I
impulsar las acciones para la educación superior con contenidos sobre las culturas indígenas;
- V. G
gestionar recursos públicos ante el Gobierno Federal para establecer la educación oficial en los territorios de las comunidades indígenas, proporcionando la infraestructura educativa y tecnológica en condiciones de equidad; garantizando que las escuelas hasta la educación secundaria, cuenten con profesores que conozcan y respeten las prácticas, usos y costumbres indígenas; y

garantizar que de conformidad a la libre determinación y autonomía de la comunidad indígena, las asociaciones de padres de familia sean electas y definidas de conformidad a sus costumbres y criterios.

Artículo 49.- Las comunidades indígenas deberán participar en el diseño, desarrollo y aplicación de programas y servicios de educación, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, de acuerdo a su identidad cultural.

Artículo 50.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán coordinar acciones con las comunidades indígenas y con los organismos correspondientes, para preservar y desarrollar el uso de sus lenguas. Para tal efecto, se elaborarán programas de investigación y fortalecimiento de las lenguas indígenas, en su forma oral y escrita, fomentando la publicación de literatura en esas lenguas.

Artículo 51.- Los comités escolares y/o asociaciones de padres de familia, podrán participar y opinar en cuestiones específicas de los procesos educativos.

CAPÍTULO VII

DE LA SALUD Y ASISTENCIA

Artículo 52.- El Estado gestionará ante el Gobierno Federal la ampliación de la cobertura de los servicios de salud pública, para lograr su acceso efectivo a éstos a favor de las comunidades y pueblos indígenas, así como de aquellos indígenas que se encuentren en tránsito por el territorio estatal.

Artículo 53.- El Estado y los municipios, a través de sus organismos de salud, garantizarán y apoyarán el desarrollo y el libre ejercicio de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, así como el uso de plantas para fines rituales y curativos, a fin de que se conserven y desarrollen como parte de su cultura y patrimonio, pero deberán ser evaluados por el sistema estatal de salud.

Artículo 54.- Las autoridades de salud promoverán el respeto a los médicos indígenas de las comunidades, siempre y cuando cuenten con el aval comunitario.

El Estado promoverá acciones conjuntas con las comunidades indígenas para el desarrollo de los conocimientos tradicionales de medicina y herbolaria. Asimismo, fortalecerá los procesos organizativos para preservar y difundir las prácticas de la medicina tradicional indígena, y propiciar una interrelación entre ésta y la medicina alópata.

Artículo 55.- El Estado y los municipios instrumentarán de manera coordinada con las propias comunidades indígenas, programas prioritarios encaminados al fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios sociales básicos de agua potable, drenaje, electrificación, vivienda y demás servicios que vigoricen el desarrollo integral de las comunidades y personas indígenas.

Artículo 56.- La autoridad comunitaria será informada y participará en las campañas de salud, vacunación y aquellas referidas a la atención preventiva de la salud y, en su caso, en las acciones normativas y adecuadas frente a la aparición de epidemias o pandemias.

CAPÍTULO VIII

DE LOS RECURSOS NATURALES

Artículo 57.- Las comunidades indígenas gozarán del derecho preferente al uso y disfrute de los recursos naturales y turísticos disponibles en sus tierras, en el marco de las competencias y acuerdos de

colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, así como de la legislación federal y estatal de la materia.

Artículo 58.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, y en coordinación con las comunidades indígenas, promoverán y fomentarán el desarrollo y aprovechamiento sustentable de sus tierras y recursos naturales.

Artículo 59.- Las comunidades podrán asociarse en términos de esta Ley para acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con las limitaciones que al respecto ésta previene, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan.

Artículo 60.- El Estado en coordinación con las comunidades indígenas, desarrollará programas encaminados a la recopilación, investigación y desarrollo de las prácticas tradicionales indígenas de conservación y explotación de los recursos naturales.

Artículo 61.- Las autoridades del Estado establecerán convenios con la Federación para otorgar facilidades a las comunidades indígenas, en el procedimiento para acceder a las concesiones para el uso y aprovechamiento preferencial de los recursos naturales que existan dentro de su territorio.

CAPÍTULO IX

DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Artículo 62.- El Estado y sus municipios, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de las comunidades indígenas y en coordinación con las mismas, deberán:

- I. E
establecer las políticas, medidas y programas para generar los estímulos fiscales y gestionar recursos públicos y privados para su aplicación en proyectos productivos, así como la promoción para agregar valor a los productos y servicios que generen las comunidades indígenas, además estimular y fortalecer la asociación de éstas para la comercialización y la creación de su propia infraestructura que permita elevar su capacidad competitiva en los mercados;
- II. B
rindar la capacitación necesaria para fomentar y desarrollar estrategias de ahorro, crédito y mezcla de recursos como un elemento sustancial para desarrollar esquemas de participación, vinculación y educación de las mujeres indígenas, y generar un aprovechamiento del capital social existente en las comunidades;
- III. F
fomentar la creación de infraestructura para el acopio, selección e industrialización de los productos agropecuarios de las comunidades indígenas, desde un enfoque orientado a la integración de cadenas productivas, a través de programas y proyectos específicos;
- IV. D
desarrollar políticas públicas para la gestión, ante el Gobierno Federal, de transferencia tecnológica, modernizando la infraestructura de las comunicaciones en lo general y en lo particular en los centros de enseñanza, introduciendo o actualizando la telefonía y la informática en las regiones y comunidades indígenas;

V. G
garantizar el incremento de las capacidades de los individuos de la comunidad indígena, para lo cual diseñarán modelos de organización, capacitación y adiestramiento, apegados a la necesidad de mejorar los productos y los servicios que potencialmente la comunidad pueda desarrollar;

VI. A
actualizar y ampliar los servicios educativos orientados a incrementar las capacidades laborales y profesionales en personal comunitario en situación de trabajo, ligándolo con el financiamiento para el establecimiento y desarrollo de la pequeña empresa y la cooperativización de las necesidades, a fin de generar autoempleo, reducción de costos en la producción o transformación de productos, e incrementar márgenes de utilidad; y

VII. P
promover el servicio social, así como la aportación de universidades, colegios y empresas, de teorías, prácticas, conocimientos y recursos articulados a iniciativas de las comunidades indígenas, creando para tal fin un Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Desarrollo de Capacidades.

Artículo 63.- El Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán reconocer los trabajos comunitarios, que consistan en la realización de obras y servicios voluntarios y de beneficio común, derivados de los acuerdos de las asambleas o de autoridades municipales y comunitarias, y considerarlos como pago de contribuciones municipales en especie.

Artículo 64.- Los municipios establecerán en los Bando de Policía y Gobierno, los mecanismos para considerar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, así como las decisiones de sus asambleas, respecto a la regulación de la venta de bebidas alcohólicas y medidas encaminadas a la prevención de la delincuencia.

Artículo 65.- En el marco de las prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, y de acuerdo a sus sistemas normativos internos, el Estado promoverá la participación plena de las mujeres en proyectos productivos, que bajo la propia administración de las mismas, tiendan a lograr el reconocimiento y respeto a su dignidad.

Artículo 66.- El Estado deberá prestar el apoyo indispensable a las comunidades indígenas, para que estén en condiciones de hacer efectivo el derecho constitucional de tener acceso a los medios masivos de comunicación en sus lenguas, así como establecer sus propios medios de comunicación en sus lenguas originarias.

CAPÍTULO X

DEL EJERCICIO Y VIGILANCIA DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES

SECCIÓN I

DE LAS PARTIDAS ESPECÍFICAS DESTINADAS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA CON LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Artículo 67.- El Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer las bases y mecanismos para la consulta directa a las comunidades indígenas para todos los asuntos que se requieran.

También deberán establecer administrativamente, las bases y mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior.

El Estado y los municipios se coordinarán con la Federación para el ejercicio de las facultades concurrentes.

Artículo 68.- Para el efectivo ejercicio de las acciones establecidas en el artículo anterior, las autoridades, en sus distintos órdenes de gobierno, deberán observar en todo tiempo los principios de subsidiariedad y complementariedad en el diseño y aplicación de sus políticas públicas, y coordinarse con las propias comunidades indígenas.

Artículo 69.- Las comunidades indígenas asumirán las funciones de Contraloría Social y coadyuvarán con el órgano de gobierno correspondiente, estatal o municipal, en el seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos correspondientes a la jurisdicción comunitaria de que se trate.

A fin de que las comunidades cumplan con este cometido, las autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionarles la información que les soliciten, en relación con los programas y proyectos de cuyo seguimiento o evaluación se trate.

SECCIÓN II

DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTALES MUNICIPALES

ADMINISTRADAS DIRECTAMENTE POR LAS COMUNIDADES

Artículo 70.- Las comunidades indígenas presentarán anualmente ante los ayuntamientos, con toda oportunidad y con su respectiva acta de Asamblea General Comunitaria, sus proyectos y programas de obras y servicios para beneficio común, a fin de que aquéllos estén en condiciones de asignarles las partidas presupuestales correspondientes, para la realización de dichos proyectos y programas.

Artículo 71.- Corresponderá a cada comunidad establecer, con base en un plan de desarrollo comunitario, los proyectos, programas, obras o servicios prioritarios, en la administración de las partidas presupuestarias asignadas. Los ayuntamientos deberán al efecto brindar la capacitación y asesoría técnica y metodológica, de manera permanente a través de prestadores de servicio y/o mediante estrategias de formación de las personas que la comunidad designe.

Artículo 72.- Los ayuntamientos asignarán las partidas presupuestales a que se refiere el artículo 70 de esta Ley, de manera equitativa, para lo cual deberán tomar en cuenta como criterios básicos la mayor o menor población y el nivel de pobreza de las comunidades, así como el impacto social y humano de las obras proyectadas, considerando para ello las demandas y prioridades comunitarias enunciados en el artículo anterior.

Artículo 73.- La vigilancia y control de las partidas presupuestales administradas directamente por las comunidades, se llevará a cabo mediante los sistemas y mecanismos implementados por la propia comunidad a través de su máxima autoridad, y en coordinación con las autoridades municipales.

Para tal efecto, el Estado y los municipios prestarán a las comunidades el apoyo que éstas requieran, tanto en el orden administrativo, como en el de capacitación.

CAPÍTULO XI

DE LOS DERECHOS ESPECÍFICOS DE LOS INDÍGENAS

Artículo 74.- Toda autoridad deberá respetar la autoadscripción que cualquier individuo haga respecto a su pertenencia u origen de un pueblo o comunidad indígena; y deberá atender en todos los casos al reconocimiento que dicha comunidad realice al respecto.

Artículo 75.- Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso y respeto de sus nombres y apellidos, en los términos de su escritura y pronunciación, tanto en el registro civil, como en cualquier documento de tipo oficial.

De la misma manera se mantendrá, pronunciará y escribirá la toponimia de sus asentamientos.

Artículo 76.- Ninguna persona indígena será discriminada en razón de su condición y origen. La ley penal sancionará cualquier acción o práctica, tendiente a denigrar a los integrantes de las comunidades indígenas por cualquier causa.

Artículo 77.- El uso de una lengua indígena no podrá ser motivo de discriminación alguna o afectación de derechos humanos.

Para el mejor cumplimiento de esta disposición el Estado y los municipios deberán establecer las medidas necesarias, para que las oficinas públicas cuenten con personal capacitado en lenguas indígenas, particularmente en las zonas del Estado con presencia indígena.

Artículo 78.- La autoridad competente adoptará las medidas pertinentes para que los indígenas sentenciados por delitos del orden común, cumplan su condena en la cárcel más cercana a la comunidad a la que pertenezcan, como forma de propiciar su readaptación social.

Artículo 79.- Para el tratamiento de las faltas cometidas por menores indígenas, se atenderá a lo dispuesto por las leyes de la materia y este Ordenamiento, debiendo siempre la autoridad preferir las formas alternativas de sanción que no sean privativas de libertad, y que se realicen cerca de la comunidad a la que pertenece el menor infractor.

Artículo 80.- El Estado velará por la salud, bienestar y respeto a los adultos mayores, procurando su protección e inclusión en programas de asistencia social, que reconozcan su dignidad y experiencia.

Artículo 81.- Los indígenas oriundos de otras entidades federativas que residan temporal o permanentemente en el territorio del Estado, tendrán en todo tiempo el derecho de invocar frente a cualquier autoridad, las prerrogativas que otorgan a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas la Constitución Federal y la particular del Estado, así como lo dispuesto por la presente Ley.

CAPÍTULO XII

DE LAS SANCIONES

Artículo 82.- En caso de incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Ley, será motivo de responsabilidad y se sancionará en términos de lo previsto en la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Se abroga la Ley sobre los Derechos y Cultura Indígena del Estado de Colima, publicada mediante Decreto número 520, de fecha 09 de mayo de 2009, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

TERCERO.- El Consejo Estatal Indígena deberá estar creado en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

CUARTO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá elaborar el Reglamento de la presente Ley en un término no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la misma.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. **A t e n t a m e n t e** Sufragio Efectivo. No Reelección Colima, Col., 05 de agosto de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Dip. Arturo García Arias Presidente, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario. Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Dip. Manuel Palacios Presidente, Dip. José Ricardo Donaldo Zúñiga Secretario, Dip. Noé Pinto de los Santos Secretario, Dip. José Verduzco Moreno Secretario Vocal, Dip. Francisco Javier Rodríguez García Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal, Dip. Ignacia Molina Villarreal Vocal. Comisión de Desarrollo Rural, Fomento Agropecuario y Pesquero. Dip. José Verduzco Moreno Presidente, Dip. Esteban Meneses Torres Secretario, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno Secretario, sería todo Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Noé Pinto de los Santos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su respectivo, Reglamento, es que les pregunto a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y a la respectiva votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano, informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debo recordarles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, es que deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado o en lo particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. No habiendo reserva alguna, con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar por separado algún artículo del dictamen que nos ocupa, es que solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que la ley, sea votada en un solo acto, en lo general y en lo particular.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si se admite que toda la ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo particular, en virtud de no existir reserva alguna. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaria. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en lo general, y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides Cobos, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero Valle, por la afirmativa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se han emitido 21 votos a favor, en lo general y en lo particular, del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Así mismo le informo a usted Presidente que no se emitieron votos en contra en lo general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretarios, con el resultado que me acaban de pasar, declaro aprobado por 24 votos a favor, en lo particular y en lo general, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente, rectifico con 21 votos a favor. Le cedo el uso de la palabra al Diputado Donaldto Zúñiga.

DIP. DONALDO ZUÑIGA. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañero Presidente, a todos ustedes, únicamente para congraciarme y reconocer también el esfuerzo que se viene haciendo desde la Comisión de Asuntos Indígenas con esta nueva Ley. El hecho de que fortalezcamos el desarrollo de los pueblos indígenas, de que podamos fortalecer y que podamos sumar también algunas otras poblaciones que no se veían beneficiadas por diversos programas y acciones, precisamente por no estar incorporadas a estas poblaciones, creo que habla bien de la Legislatura. En lo subsecuente, ojalá que desde nuestras trincheras, el Gobierno del Estado, las diversas instituciones, pues no solo quede en el tintero, quede en el papel plasmada estas nuevas reformas que se hacen a la Ley de los pueblos indígenas, sino que también en los hechos se mejore el trato, un trato digno, un trato de preferencia que requieren nuestros indígenas en el Estado y principalmente hablo por nuestras comunidades, en el caso de Comala, de Suchitlán, de Zacualpán y ahora también Pintores 1 y Pintores 2, que se suman a esta lista como la Nogalera. Así que reconocer este trabajo, agradecer la suma a todos ustedes y seguir trabajando a favor de toda nuestra gente indígena que merece mucho, que merece más aún y debemos de seguir trabajando para impulsar que crezcan a la par con cada uno de nosotros, sin distingo de razas, sin distingos de clerros, sin distingos de color, siempre pensando en la dignidad e igualdad de las personas. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Donaldto Zúñiga, de conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Colima. Por tal motivo, solicito la presencia en tribuna del Diputado Arturo García Arias.

DIP. GARCÍA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
P r e s e n t e.

A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, dos Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, la primera relativa a reformar y adicionar el artículo 216 Bis 1; y la segunda relativa a derogar el Capítulo X “De los Delitos Electorales” del Título Primero “Ejercicio Indevido de Servicio Público” de la Sección Segunda “Delitos contra la Sociedad” del Libro Segundo, así como los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 Bis 6, 135 Bis 7 y 135 Bis 8; ambas al Código Penal para el Estado de Colima, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que mediante oficio número 2506/014, de fecha 22 de mayo de 2014, los Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar y adicionar el artículo 216 Bis 1 del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por el Diputado Orlando Lino Castellanos y los demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima.

SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que:

- ♦ “
La iniciativa tiene su origen en el tratamiento que la regulación penal da al delito de pederastia y a los sujetos activos del mismo, pues no se considera de especial trascendencia, al momento de imponer las sanciones correspondientes, que sea cometido por persona a quien le asistía, por su especial relación con la víctima, una obligación de cuidarla y salvaguardar sus derechos.
- ♦ E
ste problema llama la atención de los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, toda vez que la pederastia se considera como uno de los crímenes que más daño ocasiona a los infantes, y que mayor propagación ha tenido en los últimos años. Sin embargo, al mismo tiempo en nuestra legislación se encuentran vacíos o debilidades que permiten a quienes cometen este delito, librarse de las penas establecidas en la Ley, o de obtener un castigo mínimo.
- ♦ E
s pertinente recordar que la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual entró en vigor en octubre de 1990 para el Estado mexicano, obliga a todos los Estados parte a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, se deben tomar las medidas legislativas pertinentes.
- ♦ E
n este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció en el artículo 4º que, “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.
- ♦ D
e lo anterior se concluye que el interés superior del niño, debe ser protegido desde todas las aristas de su pleno desarrollo, lo cual conlleva la consideración de que toda persona o institución que tenga a su cuidado un menor, independientemente del motivo de ello, deberá ser sujeto de supervisión y vigilancia por parte del Estado, como órgano protector del estado de derecho y del interés a favor de la infancia.
- ♦ L
uego, en consonancia con lo anterior, podemos aseverar que, es interés del Estado que todo sujeto al que le asista un deber de cuidado hacia un menor cumpla a cabalidad con éstas obligaciones. Éste deber de cuidado se encuentra consagrado en el artículo 4º de nuestra Carta Magna, al establecer, en relación con los derechos de los niños y el principio de su interés superior, que “los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios”.
- ♦ E
n cumplimiento a la obligación que como órgano legislativo impuso la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución General de la República, relacionado con el interés superior del menor, el

legislador colimense incorporó, en el dos mil trece, el delito la pederastia, pues se entendió que la ejecución de actos sexuales diversos al de la cópula, aun con el consentimiento del menor de edad, es una afectación lacerante y profunda al bien jurídico del desarrollo integral del niño en lo que ve a su libertad y seguridad sexual, mismo que debía ser tutelado por el Estado de manera integral.

P

ese al esfuerzo legislativo por evitar que un adulto consume un acto sexual contra un menor, el tipo penal que se estableció no particularizó al agresor, es decir, no contempló una sanción agravada cuando medie un vínculo entre el agresor y la víctima; lo anterior es de especial trascendencia si se considera que, el solo acto sexual es ya lacerante para el normal desarrollo de un menor y, en consecuencia, el hecho de que el sujeto activo sea alguien en quien había depositado su confianza, admiración o se encontraban en una posición de subordinación, agrava evidentemente éste daño en su desarrollo psicológico y emocional.

A

unado a lo anterior, es de resaltarse que, acorde a la Encuesta Nacional sobre Violencia contra las Mujeres, el 7.6% de las mujeres entrevistadas reportaron haber sufrido abuso sexual antes de los 15 años, siendo el agresor casi siempre alguien conocido: el padre (7.2%), el padrastro (8.2%), algún otro familiar hombre (55.1%) o el novio (3.4%).

P

or tanto, la omisión de legislar respecto de la relación o vínculo emocional que pueda existir entre el sujeto activo y el pasivo del delito de pederastia, es un vacío legal que incentiva a quienes tienen una relación emocional, de confianza o de subordinación, de aprovecharse de éste vínculo afectivo o de respeto, pues es evidente que el consentimiento que pudiese dar el sujeto pasivo se obtiene más fácilmente cuando el agresor es alguien que en teoría debería de velar por sus derechos e intereses. Es decir, las personas que tienen un vínculo afectivo, emocional o de subordinación con la víctima, como sus padres, familiares, dirigente religioso o espiritual, profesor, cuidador, entre otros, no sólo tienen mayor facilidad para obtener su consentimiento, sino que incumplen sus obligaciones con el menor, y además, debido a que las sanciones que se prevén son generalizadas, la pena le resulta beneficiosa.

E

n consecuencia, si el sujeto activo tiene un vínculo estrecho con el menor, es evidente que no solo se está violando la ley penal e incumpliendo las obligaciones de cuidado que le correspondían al agresor, sino que además está quebrantando la confianza e intimidad que en él había depositado el sujeto pasivo.

P

ara erradicar estos incentivos, donde se incumplen obligaciones que les corresponden a los progenitores, tutores, curadores u otras personas que son responsables del menor y, además, se convierten en el sujeto agresor, se propone agravar la pena que pudiera corresponderles.

P

ues los daños que se le causan a la víctima va no sólo ligados al acto abusivo, sino también a la relación existente con el abusador, de ahí que sea relevante el grado de parentesco e intimidad emocional. Por lo cual, como legisladores, debemos establecer las condiciones para que prevalezca el respeto de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, quienes constituyen un gran sector de la población vulnerable, y que lamentablemente en su mayoría son agraviados por quienes les asistía la obligación de cuidarlos.

E

n vista de ello, la propuesta de este Grupo Parlamentario está orientada a establecer una agravante a la pena prevista para el delito de pederastia atendiendo el vínculo emocional, de confianza o de subordinación que pueda existir entre la víctima y el agresor; ello para desincentivar la agresión sexual por quienes en principio deberían de cuidar el pleno desarrollo de los menores

TERCERO.- Que mediante oficio número 2788/014, de fecha 30 de julio de 2014, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a derogar el Capítulo X "De los Delitos Electorales" del Título Primero "Ejercicio Indevido de Servicio Público" de la

Sección Segunda "Delitos contra la Sociedad" del Libro Segundo, así como los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 Bis 6, 135 Bis 7 y 135 Bis 8, del Código Penal para el Estado de Colima, presentada por los diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.

CUARTO.- Que la iniciativa en sus argumentos que la sustentan, señalan que:

1°.- En julio de 1994, mediante decreto, publicado el 9 del mismo mes y año, el Honorable Congreso del Estado adicionó el Código Penal con un Capítulo X al Título Primero de la Sección Segunda del Libro Segundo, para incluir los delitos electorales locales, sus tipos penales y sanciones correspondientes, aplicables a los actos y hechos punitivos producidos en materia electoral estatal. Con diversas y periódicas reformas, adiciones y derogaciones, la regulación de los mismos subsistió con el transcurso del tiempo, de manera paralela a la transformación que experimentaron los procedimientos e instituciones electorales de la Entidad.

2°.- Recientemente, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el lunes 10 de febrero del año en curso, determinó que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, en los términos que establece dicha Constitución, señalando que corresponde al Instituto Nacional Electoral en materia de elecciones locales, la producción y aplicación de reglas, lineamientos, criterios y formatos en diversas materias, como la capacitación y la geografía electorales; el padrón y la lista de electores; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; los resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; así como la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

Asimismo, modificó el artículo 73 constitucional, fracción XXI, inciso a), para establecer, de manera consecuente, que el Congreso de la Unión tendrá atribuciones para expedir las leyes generales en materias de secuestro, trata de personas y delitos electorales, que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones.

3°.- En acatamiento a las disposiciones contenidas en la reforma constitucional a que se hace mención en el punto anterior, el Congreso del Estado llevó a cabo el proceso legislativo dirigido a actualizar las disposiciones electorales locales en concordancia con dicha reforma, lo cual se llevó a cabo en los primeros días del mes de junio del año en curso, mediante los decretos 315, 316 y 317, por los cuales reformó diversas disposiciones del Código Electoral del Estado, de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral así como el Capítulo relativo a los delitos electorales locales del Código Penal del Estado.

4°.- La Ley General en Materia de Delitos Electorales, reglamentaria de la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 constitucional, que se menciona líneas arriba, establece que es de orden público, de observancia general en toda la República y tiene por objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno.

En su artículo transitorio cuarto determinó que los Congresos de los Estados procederán a hacer las reformas pertinentes a las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la referida Ley, lo cual deberán hacer en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento. Esta Ley entró en vigor el 24 de mayo del año en curso, por lo cual los seis meses a que se refiere el transitorio mencionado concluye el 23 del próximo mes de noviembre de 2014.

QUINTO.- Que después de realizado el estudio y análisis de las iniciativas de ley con proyecto de decreto señaladas en los considerandos anteriores, esta Comisión estima procedente dictaminarlas de manera conjunta, en virtud de que ambas proponen modificaciones al Código Penal para el Estado de Colima, en los siguientes términos:

A) En cuanto a la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a reformar y adicionar el artículo 216 Bis 1, esta Comisión coincide con el iniciador en la relevancia de salvaguardar en todo momento el interés superior de la niñez, y lograr el pleno desarrollo de su personalidad.

En este sentido, la Comisión dictaminadora se suma a los esfuerzos realizados por los distintos ámbitos de gobierno para erradicar los delitos que tienen como principal objetivo dañar tanto física como psicológicamente a los menores de edad.

Las niñas y niños son parte trascendental de nuestra sociedad, y no solo representan el futuro, si no el presente, por lo que en ningún momento se deben escatimar esfuerzos en la lucha para lograr su protección en contra de todos aquellos elementos nocivos que les pueden causar un daño considerable o que les trunquen su ideal desarrollo. Por tal motivo, condenamos las conductas que afectan a la niñez colimense, y en lo específico, las que atentan contra su sexualidad, como lo es, entre otras, la pederastia.

La pederastia, fue integrada como delito en nuestro Código Penal mediante el decreto legislativo 520, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 12 de mayo de 2012, con la adición de los artículos 216 Bis 1 y 216 Bis 2.

En estos términos, la pederastia se tipificó como la conducta ejecutada por el sujeto activo que aprovechándose de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona de entre catorce años de edad y menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, la induzca o la convenza a ejecutar o ejecute cualquier acto sexual con su consentimiento.

Lo anterior se legisló con la intención de sancionar a todas aquellas personas que por encontrarse en una relación de supra-subordinación con un menor de edad, pueda influir en éste para que realice un acto sexual aún obteniendo su aprobación, siendo estos elementos clave para la actualización de dicho delito.

Por estos argumentos, la Comisión dictaminadora respalda la intención y preocupación del iniciador, en cuanto a la gravedad y consecuencias deleznable que causa esta conducta en el desarrollo pleno de los menores que son víctimas de este delito.

No obstante, se considera que la redacción del tipo penal vigente se encuentra correctamente realizada, destacando de manera congruente los elementos del delito, máxime cuando el mismo se encuentra en concordancia con el tipo penal de pederastia especificado en el Código Penal Federal, por lo que no se considera viable la modificación del texto en cuanto a su forma, como así lo propone el iniciador.

Por su parte, realizando una interpretación integral de la iniciativa materia del presente dictamen, se infiere que la intención del iniciador es la de elevar la pena impuesta a los que comenten el delito de pederastia, existiendo una relación de supra-subordinación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, situación que igualmente sucede en el tipo penal federal, que contempla una pena más alta que el delito establecido en nuestro Código.

En virtud de lo argumentado, se considera pertinente elevar la pena prevista en el delito de pederastia, armonizándola a la pena federal, con lo cual se estará sancionando al sujeto activo con una pena proporcional a la gravedad de su conducta realizada, con lo que se busca inhibir la realización de este delito.

Por lo tanto, haciendo uso de la facultad que otorga a esta Comisión el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone modificar el primer párrafo del artículo 216 Bis 1, para establecer una pena de nueve a dieciocho años de prisión, y multa por un importe equivalente de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta unidades, en sustitución a la que actualmente se prevé para el delito de pederastia; asimismo, y derivado de esta modificación, el segundo párrafo que contiene un agravante al delito de pederastia, debe ser igualmente modificado, proponiendo establezca una pena de diez a veinte años de prisión, y multa por un importe equivalente de novecientos cincuenta a dos mil quinientos cincuenta unidades.

b) En cuanto a la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativa a derogar los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 Bis 6, 135 Bis 7 y 135 Bis 8 del Código Penal para el Estado

de Colima, esta Comisión dictaminadora la considera procedente en acatamiento del inciso c) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo cuarto transitorio de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Con motivo de la nombrada reforma electoral realizada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que después del proceso legislativo correspondiente, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del año en curso, se vio modificado el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, estableciendo como facultad exclusiva del Congreso de la Unión expedir las leyes generales en materia de delitos electorales.

Como consecuencia jurídica de la citada reforma, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de Mayo de 2014 la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuyo objetivo es establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno en materia de delitos electorales.

Por otra parte, el artículo cuarto transitorio de la Ley General, establece que los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Por lo anterior, se considera procedente la derogación del Capítulo X “De los Delitos Electorales” del Título Primero “Ejercicio Indevido de Servicio Público” de la Sección Segunda “Delitos contra la Sociedad” del Libro Segundo, así como los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 Bis 6, 135 Bis 7 y 135 Bis 8 del Código Penal del Estado; con lo que en tiempo y forma se está dando cumplimiento a lo establecido por el artículo cuarto transitorio de la multicitada Ley General.

Asimismo, es necesario establecer un artículo segundo transitorio para disponer que tanto la investigación como la persecución de los delitos en materia electoral deberán sujetarse a lo previsto por la Ley General y demás legislación federal y local aplicable, con el fin de que exista una total adecuación con el marco legal federal, como se marca en esta materia.

Con lo expuesto, se pretende que en nuestra entidad sean correctamente aplicadas las disposiciones y lineamientos que establece la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sin que exista ningún tipo de incongruencia o contradicción entre lo que establece la misma y lo que se encontraba previsto por el Código Penal para nuestra entidad.

En estos términos, la Comisión dictaminadora vislumbra positiva y procedente la iniciativa materia del presente dictamen, con la cual se está perfeccionando el marco electoral del Estado en aras de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los ciudadanos colimenses, y hacerlos valer ante conductas que afecten su desarrollo.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:

DICTAMEN

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar el primer párrafo del artículo 216 Bis; y derogar el Capítulo X “De los Delitos Electorales” del Título Primero “Ejercicio indebido de servicio público” de la Sección Segunda “Delitos contra la Sociedad” del Libro Segundo, que contiene los artículos 135 Bis 1, 135 Bis 2, 135 Bis 3, 135 Bis 4, 135 Bis 5, 135 Bis 6, 135 Bis 7 y 135 Bis 8; todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 216 BIS 1.- Se aplicarán de nueve a dieciocho años de prisión y multa por un importe equivalente de setecientos cincuenta a dos mil doscientos cincuenta unidades a quien aprovechándose de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre una persona de entre catorce años de edad y menor de dieciocho años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, la induzca o la convenza a ejecutar o ejecute cualquier acto sexual con su consentimiento.

Cuando el sujeto pasivo de este delito, conforme a la hipótesis señalada en el párrafo anterior, sea menor de catorce años de edad, o sea una persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo, se impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y multa por un importe equivalente de novecientos cincuenta a dos mil quinientos cincuenta unidades

.....
.....
.....
.....

CAPÍTULO X DEROGADO

ARTÍCULO 135-Bis-1.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-2.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-3.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-4.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-5.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-6.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-7.- (DEROGADO)

ARTÍCULO 135-Bis-8.- (DEROGADO)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

SEGUNDO.- Con respecto a la descripción típica y penalidad, la investigación y persecución de los delitos se estará a lo dispuesto en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y demás legislación federal y local aplicables.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Los integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser aprobado el presente dictamen, se emita el Decreto correspondiente. Atentamente Colima, Col., 06 de agosto de 2014. Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, Dip. Martín Flores Castañeda Secretario, Dip. Héctor Insúa García Secretario y el de la voz, Dip. Presidente, Arturo García Arias. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y a la respectiva votación del dictamen que nos ocupa en la presente sesión, es por ello que solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta que acabo de hacer.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. En ese sentido, con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Procede a hacerlo la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 21 votos a favor, del documento que nos ocupa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Informo a usted Presidente que no se emitió ningún voto en contra del dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado que me acaban de pasar, se señala y se declara aprobado por 21 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por la que se otorgan pensión por jubilación a los CC: Mario Ribera Beltrán, Jorge López Pérez, Jorge Rivera Torres, Martín Pérez, y Martín Cervantes Venegas, así mismo se le concede la pensión por vejez, a los CC. José Luis Venegas Meillón y por en el caso, final a Abel Sánchez Pérez. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras y compañeros Secretarios de la Mesa Directiva. Compañeros Diputados y Público asistente gracias por estar aún a esta hora con nosotros. Diputado Presidente, con fundamento en los artículos 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y por tratarse de asuntos de obvia resolución y no ameritan un examen profundo, solicito someta a la consideración de la H. Asamblea, la propuesta de obviar la lectura de los considerandos de los dictámenes contemplados en los puntos del VII al X del orden del día, para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Atendiendo la solicitud del Diputado Martín Flores, tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, si hay alguna referencia. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta hecha por el Diputado Flores Castañeda.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Fue aprobada por mayoría la moción hecha por el Diputado Flores, adelante.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Gracias

**H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.**

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los artículos 33 fracción XL de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, siete iniciativas del Poder Ejecutivo Estatal, para otorgar pensión por Vejez y Jubilación; y

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N:

ARTÍCULO PRIMERO.- Se concede pensión por Jubilación a los ciudadanos: Mario Ribera Beltrán, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, quien estuvo adscrito al Despacho del Secretario de Turismo, dependiente de la Secretaría de Turismo, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$18,329.02 y anual de \$219,948.24; Jorge López Pérez, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe de Departamento”, plaza sindicalizada, quien estuvo adscrito a la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$20,304.14 y anual de \$243,649.68; Jorge Rivera Torres, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Director, plaza de confianza, quien estuvo adscrito a la Dirección de General de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$30,000.00 y anual de \$360,000.00; Martín Pérez, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza sindicalizada, quien estuvo adscrito a la Dirección de General de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$18,424.65 y anual de \$221,095.80; y Martín Cervantes Venegas, pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Encargado de Mantenimiento”, plaza sindicalizada, quien adscrito al Despacho del Secretario de Desarrollo Urbano, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$13,625.75 y anual de \$163,509.00. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se concede pensión por vejez al ciudadano José Luis Armando de la Vega Meillón, equivalente al 51.35% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento "A", plaza supernumeraria, quien estuvo adscrito al Despacho del Secretario de Fomento Económico, dependiente de la Secretaría de Fomento Económico, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$9,970.03 y anual de \$119,640.36, así como al ciudadano Abel Sánchez Pérez, equivalente al 69.93% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento "B", plaza de confianza, quien estuvo adscrito a la Dirección de General de Desarrollo Rural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Rural, pensión que deberá pagarse mensualmente la cantidad de \$12,066.70 y anual de \$144,800.40. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos.

T R A N S I T O R I O :

UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección agosto 5 de 2014, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, firman su Presidente Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval, Luis Fernando Antero Valle, Diputados Vocales Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz Martín Flores Castañeda Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Martín. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, es que se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Señor Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaría, con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee así hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Procede a hacerlo la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor, del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo también a usted Presidente que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco ninguna abstención del dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado en referencia, con 20 votos a favor, declaro aprobado el dictamen que nos ocupa instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura a los artículos resolutivos y transitorios del dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por la que se otorgan pensión por jubilación a los CC: Martín Enrique Michel Ureña y Francisco Javier Aguilar Muñiz. Se le cede el uso de la voz en tribuna al Diputado José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Con su permiso Diputado Presidente.

H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E.

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, dos iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación al C. Martín Enrique Michel Ureña, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Secundaria II y Maestro de Grupo II, adscrito a la Escuela Primaria Nocturna “Aniceto Castellanos” y a la Sección 39 del SNTE, ubicados en Villa de Álvarez, Colima, y esta ciudad respectivamente, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$14,552.32 y anual de \$174,627.84; y al C. Francisco Javier Aguilar Muñoz, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrático de Secundaria II y Maestro Especial de Primaria II, adscrito a las Escuelas Secundarias Matutinas No. 8 “Constitución de 1857”, 11 “Aurelia Razón Márquez” y 5 “José Mora Verduzco” de esta Ciudad, Lo de Villa, Colima y Cuauhtémoc, Colima, respectivamente, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$20,716.74 y anual de \$248,600.88, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos.

T R A N S I T O R I O:

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., agosto 5 de 2014, La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la signan el Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente, el Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, el Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal y el de la voz Dip. José Antonio Orozco Sandoval Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Orozco Sandoval. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, es que se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee así hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 20 votos a favor, del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo a usted Presidente que no se emitió ningún voto en contra tampoco alguna abstención del dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado en referencia, con 20 votos a favor, declaro aprobado el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite que corresponda. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo Estatal por la que se otorgan pensión por jubilación a las CC. Irma Patricia González Gómez, Ma. de Jesús Pulido Guardado. Daria Socorro Contreras Villaseñor, Zenaida Gutiérrez Meraz, Mónica Pérez Santana, Hortensia Vergara Aragón, Eva Elizabeth Delgado Decena, Susana Ramírez Galván, Juana Hernández Horta, Alma Delia Arreola Cruz, y Ceclia Venegas Vizcaíno, para dar lectura a la propuesta del dictamen solicito la presencia en tribuna del Diputado Oscar A. Valdivinos Anguiano,

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias Diputado Presidente, me permitiré hacerlo desde el lugar de la Secretaría.

H. CONGRESO DEL ESTADO P R E S E N T E.

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, nueve iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación a las ciudadanas: Irma Patricia González Gómez, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Oficina “A”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Servicios Sociales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$14,961.47 y anual de \$179,537.64; Ma. de Jesús Pulido Guardado, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$15,453.86 y anual de \$185,446.32; Daría Socorro Contreras Villaseñor, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Auxiliar de Información”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$14,981.96 y anual de \$179,783.52; C. Zenaida Gutiérrez Meraz, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Jefe”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Averiguaciones Previas, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$15,610.60 y anual de \$187,327.20; Mónica Pérez Santa Ana, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento, plaza sindicalizada, presta sus servicios en la Coordinación Técnica, dependiente de la Secretaría de Cultura, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$20,303.58 y anual de \$243,642.96; Hortensia Vergara Aragón, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de “Contador”, plaza sindicalizada, quien presta sus servicios en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, dependiente de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal Colima, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$18,464.20 y anual de \$221,570.40; Eva Elizabeth Delgado Decena, equivalente al 100% de sueldo correspondiente a la categoría de “Profesor”, plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$13,825.49 y anual de \$165,905.88; Susana Ramírez Galván, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Coordinador “A”, plaza de confianza, quien

estuvo adscrita al Despacho del Secretario de Turismo, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$18,973.42 y anual de \$227,681.04; Juana Hernández Horta, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Directora de Procesos Legislativos, plaza de confianza, adscrita a la Dirección de Procesos Legislativos del H. Congreso del Estado, dependiente del Poder Legislativo, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$42,591.52 y anual de \$511,098.24; Alma Delia Arreola Cruz, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Jefe de Departamento "A", plaza sindicalizada, adscrita a la Dirección de Programación, dependiente de la Secretaría Planeación, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$29,955.19 y anual de \$359,462.28; y Celia Venegas Vizcaíno, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de "Jefe", plaza sindicalizada, adscrita al Supremo Tribunal de Justicia, dependiente del Poder Judicial del Estado, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$15,824.18 y anual de \$189,890.16. Autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45202 del Presupuesto de Egresos.

T R A N S I T O R I O :

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, lo signan Dip. José Antonio Orozco Sandoval el Dip. Luis Fernando Antero Valle Secretario, el Dip. Martín Flores Castañeda Vocal, Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal y el de la voz Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Oscar Valdovinos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, es que se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario, con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee así hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procede a votar la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 22 votos a favor, del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Así mismo le informo a usted Presidente que no se emitió ningún voto en contra tampoco alguna abstención en el dictamen que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos a favor, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Aprovecho en el uso de la voz compañeras y compañeros Diputados, y en mi calidad de Presidente hacer un reconocimiento público a la labor, el profesionalismo, la dedicación realizada por la Licda. Juanita Hernández Horta, que es sin duda alguna su profesionalismo y su entrega a este Congreso del Estado de Colima ha transformado la vida de este Parlamento. Una felicitación y un reconocimiento Licenciada. Se declara un receso hasta por una hora..... RECESO..... Se reanuda la Sesión. Para continuar con el orden día se procede a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas del Ejecutivo para conceder pensión por jubilación a las CC. María Elena Flores López, María Leticia Reyes Casian, y a Claudia Graciela Terriquez Castillo. Para el uso de la voz de la lectura del presente dictamen el Diputado Oscar Valdovinos. En Tribuna.

DIP. VALDOVINOS ANGUIANO. Con su permiso Diputado Presidente.

**H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.**

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en el artículo 33, fracción XL, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 54, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, le fueron turnadas para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, tres iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación, y Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N:

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se concede pensión por jubilación a la C. María Elena Flores López, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Asistente de Servicios en el Plantel II y Asistente de Servicios en Plantel II con ½ Plaza interina, adscrita a la Escuela Primaria Matutina “Ignacio Manuel Altamirano” y a la Sección 39 del SNTE, de esta Ciudad, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$13,253.04 y anual de \$159,036.48; a la C. Ana María Leticia Reyes Casian, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Catedrática de Secundaria III, adscrita a las Escuelas Secundarias Matutina y Vespertina No. 3 “Manuel Murguía Galindo” de Manzanillo, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$24,628.50 y anual de \$295,542.00; y a la C. Claudia Graciela Terriquez Castillo, equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a la categoría de Inspectora Encargada de Jardín de Niños C/M II, adscrita a la Supervisión de Preescolar y Comisionada a la Dirección de Fortalecimiento Magisterial de la Secretaría de Educación, pensión que deberá pagarse en una cantidad mensual de \$28,619.40 y anual de \$343,432.80, autorizándose al Titular del Poder Ejecutivo para que afecte la partida número 45201 del Presupuesto de Egresos.

T R A N S I T O R I O:

ÚNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el Decreto correspondiente. Por la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Lo signan los Diputados Secretarios José Antonio Orozco Sandoval y Luis Fernando Antero

Valle, los Diputados Vocales, Martín Flores Castañeda y Marcos Daniel Barajas Yescas y el de la voz Oscar A. Valdovinos Anguiano Diputado Presidente. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Valdovinos. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI, de su Reglamento, es que se pregunta a ustedes señoras y señores Diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación en consecuencia del dictamen que nos ocupa, en la presente sesión. Solicito a la Secretaría de favor recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretaría, con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior y por tanto, se pone a la consideración de esta H. Asamblea el dictamen que nos ocupa. En el uso de la voz quien desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por la afirmativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Por la negativa.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procede a hacerlo la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Benavides, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por 19 votos.

DIP. SRIA. BENAVIDES COBOS. Le informo a usted Presidente que no se emitió ningún voto en contra.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 19 votos, el dictamen que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día que se procede a dar lectura al acuerdo por el que se declara Recinto Oficial a Esta Soberanía al Jardín Libertad de la Ciudad de Colima para que se lleve a cabo la sesión solemne, para conmemorar que en 1824, se impuso la categoría de ciudad a la población de Colima, es que le cedemos el uso de la voz al Diputado Martín Flores Castañeda.

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente. Antes de dar lectura agradezco igualmente la presencia del Secretario de Desarrollo Rural, del Presidente de la Unión de Plataneros del Estado de Colima, así como de quienes hoy nos acompañan.

Los suscritos Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Francisco Javier Rodríguez García, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la

Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 5, 47, 53, y 79 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 4, 107 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea el presente Acuerdo en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

I.- Desde 1824 se conmemora la imposición de la categoría de Ciudad a la población de Colima, teniendo en cuenta que consumada la Independencia por Agustín de Iturbide, fue Pedro Celestino Negrete quien proclamó en Guadalajara el Plan de Iguala y asumió el poder tras la huida del intendente virreinal. Luego mandó que corporaciones y provincias hicieran lo correspondiente. Anastasio Brizuela era el comandante militar de la plaza de Colima. El 16 de junio de 1821, en medio del júbilo popular, se juró en Colima la fidelidad a las tres garantías. A principios de septiembre de ese mismo año y por instrucciones de la diputación de Guadalajara, los ayuntamientos de Zapotlán y Colima señalaron sus fronteras: aquél cedía Tonila; éste, Tecalitlán y Xilotlán, por la misma razón: quedaban lejos de las respectivas cabeceras.

Fue José María Gerónimo Arzac, representante de la diputación por Colima quien ante el honorable Congreso Constituyente de 1824, llevó la posición política de los colimenses, sugiriendo incluso la incorporación del partido de Zapotlán al nuevo estado, pero en la sesión del 30 de enero de 1824 se determinó que Colima seguiría siendo territorio -del que por no identificarse la población perdía el recién agregado Tonila-, dependiendo directamente del gobierno central porque no tenía los elementos para erigirse en entidad federativa. Como respuesta, el 10 de septiembre de 1824 la Villa de Colima se elevó a la categoría de ciudad y el pueblo de San Francisco Almoloyan a la de Villa.

En 1848 gracias al empuje y fortalecimiento del poblado de Colima se devino en la consolidación del Territorio y su fundamentación para constituirse en el Estado Libre y Soberano, teniendo como capital sede de sus poderes a la desde el 10 de septiembre de 1824, hará 190 años, ciudad de Colima.

Tomando en cuenta lo antes narrado y por tratarse de un hecho trascendental para los habitantes de municipio de Colima y los colimenses, toda vez que al otorgarse la categoría de Ciudad a la población de Colima, otorgándole así reconocimiento legal como agrupación social, política y administrativa; esta Comisión considera pertinente la celebración de una sesión solemne en dicho Municipio.

II.- Que en sesión número 45 de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios sus integrantes y los que suscribimos, aprobamos acuerdo parlamentario en el cual, se determinó llevar a cabo sesión solemne para conmemorar la elevación de Ciudad a la población de Colima el día 10 de Septiembre del presente año a las 19:00 horas, decretando para tal efecto el Jardín Libertad de dicho Municipio, con la opción de que, en caso de lluvia, esta Comisión designe el lugar en el cual se celebrará la citada sesión.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración de los Diputados integrantes de esta soberanía el siguiente:

ACUERDO No.

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 5º, 47 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 4º y 107 de su Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Jardín Libertad de esta Ciudad, a efecto de que en dicho lugar, el día 10 de Septiembre próximo a partir de las 19:00 horas, se lleve a cabo una Sesión Solemne para conmemorar que en 1824 se impuso la categoría de Ciudad a la población de Colima; con la opción de que, en caso de lluvia, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios designará el lugar en el cual se celebrará la citada sesión.

SEGUNDO.- Una vez aprobado por la asamblea el presente acuerdo, por conducto del Oficial Mayor del Congreso, gírense las invitaciones correspondientes a los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial en el Estado.

La Comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente Acuerdo, se publique en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá su publicación. Atentamente Colima, Col., 06 de agosto de 2014, La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Dip. Martín Flores Castañeda Presidente, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez Secretaria, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez Secretario, Dip. Francisco Javier Rodríguez García Vocal, Dip. Mariano Trillo Quiroz Vocal y Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas Vocal. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Gracias Diputado Flores Castañeda. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que nos ocupa, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado o la Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de dicho documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo que nos ocupa, instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se les solicita que levanten la mano la participación de los pares legislativos. Muchas gracias, en el uso de la voz la Diputada Nachita Molina.

DIP. MOLINA VILLARREAL. Muchas gracias Presidente, con permiso de la Mesa Directiva, con permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público asistente. La Organización de las Naciones Unidas definen a la familia: "Como una unidad en los estudios demográficos que representa todo un hogar o una parte de este, una familia estadística o una familia censal generalmente se compone de todos los miembros de un hogar emparentados por consanguinidad, adopción o matrimonio." La familia es el ámbito donde los individuos nacen y se desarrollan, así como el contexto en el que se construye la identidad de las personas por medio de la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado y se deben desarrollar actividades para promover el fortalecimiento de la estructura familiar en sus respectivos ámbitos de competencia. Por su parte, la UNESCO, ha establecido el término de Seguridad Humana como un concepto multidimensional. Se destacó el carácter holístico e integrador de este concepto y la importancia central de ubicar la protección de la persona como un eje articulador de la seguridad internacional. En ese sentido, este concepto establece aquellas dimensiones que afectan a la seguridad de las personas e identifica amenazas tradicionales y no convencionales a la seguridad bajo este prisma. La seguridad humana es complementaria a la seguridad estatal y la seguridad internacional. El comportamiento de cada uno de los integrantes de la familia es un factor determinante en el tipo de relaciones que se generan al interior de la misma, el modo como se trasladan estas expresiones de comunicación al plano de vida cotidiana puede resumirse en dos formas, en apoyo ante acontecimientos adversos y en tensiones o conflictos que llegan a propiciar un ambiente de violencia en el hogar. De lo anterior podemos reflexionar que si bien es cierto, que la pérdida de valores, desintegración familiar,

disfuncionalidad familiar, violencia intrafamiliar y adicciones; son factores primarios para crear una sociedad violenta, deshumanizada y hundida en las adicciones; también lo es, que de acuerdo al CENSO 2010 del INEGI, del total de hogares en México, 90.5% son de tipo familiar, por lo que resulta ser un número importante de personas que vivimos en familia, por ende es trascendente incidir en esos aspectos como sociedad, y tomar las riendas. Desafortunadamente, la gran mayoría ignoramos la importancia de los valores y la seguridad familiar, y por el contrario, queremos que el gobierno nos resuelva todo. No se trata de hechos aislados o raros, sino de una situación que se ha vuelto común, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, identifica dos tipos de acontecimientos de violencia (física y emocional) que las mujeres de 15 y más años pudieron haber tenido por parte de algún miembro de su familia de origen, durante su niñez; reflejando así antecedentes de los comportamientos familiares. De igual forma, el maltrato a las personas mayores ocurre en todas las culturas, naciones y clases sociales, desafortunadamente México no es la excepción, ante esta situación se realizan esfuerzos para garantizar el bienestar de este grupo poblacional y el ejercicio pleno de sus derechos. En nuestro país, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece las obligaciones de la familia y su función social para con sus adultos mayores, y prohíbe que “sus integrantes cometan cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos”. Como podemos darnos cuenta, los principales actos de violencia se dan en el seno familiar, sin embargo, debemos ir más allá del análisis, no podemos quedarnos de brazos cruzados y exigir que las autoridades resuelvan la situación, hay que actuar asumiendo nuestra responsabilidad social, desde nuestros lugares y de acuerdo a nuestras capacidades; para ello es necesario ir a la raíz de los graves males que aquejan a la sociedad. Nuestro Estado, como muchos otros del país está pasando por un periodo difícil en el ámbito social, cada vez es más escasa la convivencia armónica y pacífica, no solo entre vecinos, sino también, al interior de las familias. Esto sucede por el crecimiento de la violencia, que se manifiesta principalmente al interior del seno familiar con desamor, indiferencia, rencores y falta de sustento espiritual. Amigos legisladores y ciudadanos presentes, es urgente fortalecer la unión familiar, y recapacitar sobre los problemas que tenemos como sociedad, los cuales derivan de la actuación de integrantes de la célula de la sociedad, como lo es la familia. La pérdida de la paz, no es un fenómeno instantáneo, ha sido a través del tiempo con distintas manifestaciones y participan diversos factores; por lo que aun cuando sean acertadas, no basta con las acciones de gobierno; no se trata de culpar al resto, se trata de cada uno de nosotros asumamos nuestra responsabilidad, redireccionando nuestras actuaciones y reeducando a nuestra familia en base a los valores y el amor filial. Con base en el análisis anterior, los invito a realizar un breve examen y cuestionarnos ¿qué estamos dispuestos a hacer para recuperar la unidad de las familias colimenses, así como la de nuestra propia familia; y por añadidura poder recuperar así la armonía y tranquilidad de nuestro estado y comunidad. Por esta razón les propongo sumarnos a un itinerario permanente de hábitos para rescatar la armonía de las familias colimenses, con actividades recreativas sencillas de nuestra sociedad, que vuelva a ser una buena costumbre sentarnos en familia a compartir por lo menos un alimento al día, regresemos el diálogo en los hogares como un arma de negociación en la solución de conflictos, y enérgicamente acompañemos a nuestros hijos en su andar por la vida, no los ignoremos. Amigos somos más los buenos, y unidos podemos lograrlo. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada Nachita. En el uso de la voz la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez.

DIP. ROCHA RAMIREZ. Gracias Presidente, de nuevo buenas tardes Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. La Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez integrante de la Quincuagésima Séptima

Legislatura del periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la **Ley Estatal de Obras Públicas**, misma que se presenta al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como finalidad erradicar las prácticas propagandísticas de los funcionarios públicos, quienes al ejecutar una obra pública la denominan con su nombre o lo colocan en una placa inaugural, atribuyéndose así el mérito de la obra pública, a pesar de que ésta, como cada acción del gobierno, es pagada en su totalidad por las contribuciones monetarias de la sociedad.

Desde el dieciocho de octubre de mil novecientos setenta y dos se publicó el Acuerdo mediante el cual se prohibió el uso del nombre del Presidente de la República y de los funcionarios públicos en la denominación o placa inaugural de las obras públicas realizadas con recursos federales.

En el aludido acuerdo se argumentó que la prohibición se debía a que, tanto el mérito en la promoción y en la edificación nacional eran producto del afán organizado de superación del propio pueblo, se entendió que el Gobierno Federal era un mero coordinador de ese esfuerzo natural y, en consecuencia los funcionarios públicos se encontraban obligados a acentuar el sentido de servicio al abstenerse de apropiarse méritos que no les corresponden.

El argumento dado a nivel federal se encuentra también consagrado en los artículos 3º y 4º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los cuales expresamente disponen que *“la soberanía del Estado reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público”*, el cual se constituye *“para beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de éste”*.

Es decir, la Constitución Local es clara al determinar que el gobierno estatal y municipal es un mero coordinador de los esfuerzos y voluntades del pueblo y, no un benefactor de éste. Lo anterior es de especial relevancia si se considera que, por tradición, las obras públicas estatales y municipales llevan el nombre del servidor público que administró y ejecutó recursos, pues se considera, erróneamente, que es mérito de éste y que lo hace por benevolencia para con el pueblo colimense.

Ésta práctica, que contraviene la esencia del poder público, es además antidemocrática, pues las obras públicas edificadas con presupuesto del erario público, son personalizadas por quien conduce el gobierno, en un afán de dejar una muestra palpable que su persona o su partido político “produjo” un beneficio para el pueblo.

La propaganda política visible en cada una de las obras públicas, espacios públicos y servicios relacionados, lesiona profundamente la democracia en el Estado de Colima. Pues esa ambición de los servidores públicos de dejar una “constancia objetiva de la magnitud de su obra”, como si fuese ejecutada con su dinero y no con el dinero del pueblo, sitúa en el imaginario colectivo la idea errónea de que las obras públicas son producto de una persona o gobierno, actos de benevolencia y muestra de la buena voluntad del gobernante.

Las placas inaugurales y la denominación de las obras públicas son auto-propaganda del gobernante en turno, y hacen clara referencia a que los recursos públicos que se ejercieron para lograr su edificación son un medio para posicionarse políticamente.

Esa publicidad gubernamental es fuente de la intoxicación ideológica que se encuentra en diversas áreas de la sociedad, como la política, que impiden notar que las obras públicas se financian con dinero de los contribuyentes y, que únicamente se ha encargado a sus servidores públicos la administración y ejecución de éstas. Por esta razón, si alguien tiene mérito de las obras y las edificaciones que se

realizan, es el pueblo mismo, no sus gobernantes quienes en una sociedad democrática son solamente trabajadores del mismo.

Así, con esta iniciativa lo que se busca es reivindicar la verdad y fortalecer a la democracia. Es necesario que servidores públicos y ciudadanos tengan claro que las obras públicas son del Estado de Colima y sus Municipios, no de un gobierno o un funcionario particular; que son pagadas con sus contribuciones y; que es obligación de los gobernantes realizarlas y no un acto de benevolencia.

Es momento de emprender acciones legislativas que inhiban las prácticas antidemocráticas, al impedir el uso político de los recursos públicos, prohibir la publicidad pagada con el dinero de los colimenses e, incentivar que la ejecución de obras públicas sea con la intención de solucionar un problema social y no de “dejar huella” de su administración y partido político.

Con base en todo lo anterior es que la suscrita Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, considero pertinente implementar medidas legislativas que prohíban el denominar o colocar una placa inaugural en las obras públicas con el nombre del servidor público que la ejecuta durante su gestión, con la finalidad de inhibir la utilización de recursos públicos con fines políticos. Por lo antes expuesto, en uso de las atribuciones que me confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. SE ADICIONA EL ARTÍCULO 6º BIS DE LA LEY ESTATAL DE OBRAS PÚBLICAS.

Artículo 6º Bis. Se prohíbe que en las placas inaugurales o de identificación de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, que realicen las dependencias estatales, las dependencias municipales, los organismos descentralizados o las empresas de participación estatal, se incluyan los nombres del Gobernador del Estado, presidentes municipales u otros funcionarios públicos.

En dichas placas, deberá asentarse únicamente que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas fueron realizados por el gobierno estatal o municipal, con el esfuerzo del pueblo, y que se entregan para beneficio de éste en fecha determinada.

A ninguna obra pública o servicios relacionados, podrá imponérsele el nombre del Gobernador del Estado, presidentes municipales u otros funcionarios o ex funcionarios públicos. Tampoco podrán emplearse signos, eslogan, emblemas y colores alusivos a los partidos políticos o característicos de la administración en turno en las obras realizadas.

Es obligación del Gobernador del Estado, los presidentes municipales y demás funcionarios públicos adoptar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo; en caso contrario, se aplicará lo establecido por la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.

Publíquese en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Atentamente Colima, Col., 06 de agosto de 2014. Diputada integrante del Partido Acción Nacional. Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputada Gina Rocha. Solicito a la Secretaría le de el trámite que corresponda. En el uso de la voz la Diputada Gabriela Benavides Cobos.

DIP. BENAVIDES COBOS. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados, del público asistente, del Secretario de Estado que nos acompaña, bienvenido, un gusto saludarlo, de los medios de comunicación, me permito presentar la siguiente iniciativa

CC. SECRETARIOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

P R E S E N T E.-

DIP. GABRIELA BENAVIDES COBOS, y los demás diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional; del Partido Revolucionario Institucional; del Partido Nueva Alianza; del Partido Revolucionario Democrático; y los diputados únicos del Partido del Trabajo; y del Partido Verde Ecologista de México; pertenecientes a la Vigésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción I, 85, 86 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en correlación con los numerales 122, 123, 124 y demás relativos del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante el pleno de esta cámara, con el fin de someter a su consideración la aprobación de la Iniciativa de Ley con Proyecto de decreto relativa a reformar el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 235, mediante el cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, del día 30 de Noviembre del año 2013, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- En la sesión pasada aprobamos con dispensa de todo tramite una iniciativa enviada por el ejecutivo estatal con el objetivo de crear incentivos fiscales a los amigos motociclistas, sin embargo los diputados de todas las fracciones propusimos modificar la iniciativa y ampliar dichos beneficios a los amigos automovilistas y así fue que todos los diputados presentes aprobamos reformar la Ley de Hacienda del Estado de Colima con el fin de condonar durante todo el mes de agosto el 100 por ciento de recargos y multas generadas por el atraso en el pago del Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, asimismo se condonan en un cien por ciento los recargos y multas que se hayan generado por la omisión en el pago de los derechos relacionados con el canje de placas de circulación de vehículos y motocicletas durante el periodo del primero de agosto hasta el 31 de octubre de este año.

SEGUNDO.- Ahora bien en el artículo 32 de la Ley de Transporte y Seguridad Vial del Estado de Colima prevé la clasificación de las Licencias de los Conductores de Vehículos de motor en:

I Motociclistas;

II Automovilistas;

III Choferes clase 1;

IV Automovilistas y motociclistas;

V Choferes clase 1 y motociclistas;

VI Choferes clase 2; y

VII Conductores de servicio

En el mismo decreto referido en el primer punto aprobamos condonar el 50 por ciento el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motocicletas durante el periodo del primero al 31 de agosto.

Le pido Diputado Presidente pueda continuar con la lectura el Dip. José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias, se le concede el uso de la voz al Dip. José Antonio Orozco Sandoval.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Gracias Presidente le doy continuidad a la lectura que inicio mi compañera Gaby.

Sin embargo nada se comentó respecto a las licencias de los automovilistas y choferes o de alguna otra modalidad referida en la ley, toda vez que no habíamos tenido la oportunidad de leer la iniciativa del ejecutivo con antelación y la conocimos en el momento de su lectura.

Por lo que considero oportuno que en igualdad de oportunidades se pueda dar este mismo beneficio a los todos aquellos ciudadanos que requieran renovar o sacar por primera vez cualquiera de las licencias que se mencionen en la ley en comento.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de:

DECRETO:

“Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto número 235 que reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Colima, del día 30 de Noviembre del año 2013 para quedar como sigue:

PRIMERO a CUARTO.- ...

QUINTO.-

.....

.....

Se condona en un 50 % el pago de los derechos por la expedición de licencias de conducir motociclistas; automovilistas; choferes clase 1; automovilistas y motociclistas; choferes clase 1 y motociclistas; choferes clase 2; y conductores de servicio durante el periodo del 01 al 31 de Agosto del 2014.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y entrará en vigor el día 7 de agosto del 2014.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”

Diputado Presidente con fundamento en los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 124 y 137 de su Reglamento, y por tratarse de un asunto de obvia resolución y no ameritar un examen más profundo solicito someta a la consideración de la H. Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario de esta iniciativa que acaba de ser leída para que se proceda en forma inmediata a su discusión y votación.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Orozco, con mucho gusto señoras y señores Diputados, en virtud de la petición hecha por el Diputado Orozco Sandoval, y por las razones que él mismo expone es que se somete a la consideración de dispensa la propuesta de dispensa de todo

trámite reglamentario, de la iniciativa que nos ocupa, para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos, tiene así la palabra el Diputado que desee hacerlo. En vista de no haber alguna participación parlamentaria solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputado Presidente que la propuesta es aprobada por mayoría.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE, muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada por la Secretaría se declara aprobada la propuesta anterior, y por tanto, se pone a la consideración de la Asamblea, la iniciativa que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.

DIP. OROZCO SANDOVAL. Debo continuar solamente para concluir con la lectura del dictamen. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., a 6 de agosto del año 2014, y lo signan la Diputada Gabriela Benavides Cobos, el Dip. Héctor Insúa García, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Donald Ricardo Zúñiga, Dip. Orlando Lino Castellanos, Dip. Rafael Mendoza Godínez, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Yulenny Guylaine Cortés León, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. Gretel Culin Jaime, Dip. Heriberto Leal Valencia, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Arturo García Arias, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villareal, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Luís Antero Valle, Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Francisco Javier Rodríguez García, Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas y Dip. Mariano Trillo Quiroz. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado. Es entonces en la conclusión de esta lectura que solicito a las señoras y señores Secretarios, nos puedan habilitar para recabar la votación económica de la correspondiente propuesta anterior.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal si de aprobarse el dictamen que nos ocupa.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO Por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por la negativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. ¿Falta algún Diputado o Diputada por votar? Procede a votar la Mesa Directiva.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Valdovinos, a favor.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Antero, por la afirmativa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Le informo Diputado Presidente que se emitieron 19 votos a favor del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. También le informo Diputado Presidente, que no se ha emitido ningún voto en contra, tampoco alguna abstención del documento que nos ocupa.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Con el resultado en referencia, declaro aprobado por 19 votos, el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para el uso de la voz se le concede al Diputado José Verduzco, Manuel Palacios.

DIP. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con su permiso Presidente. Compañeros Diputados, público asistente. El suscrito

C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

Presente

El suscrito Diputado Manuel Palacios Rodríguez y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, así como los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en el ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 22, fracción I, 83, fracción I y 84, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Acuerdo, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Estado cuenta con 10 municipios, cada uno con diferentes características, sin embargo, es preciso señalar que por las mismas condiciones naturales de la entidad, año con año se ve afectada de diferente manera la población de cada municipio, en este sentido, el Estado y su administración pública debe accionar siempre por el bienestar de la sociedad colimense, implementando medidas acorde a las necesidades y características de los municipios, para así garantizarle a sus gobernados, una vida prospera dotada siempre de seguridad.

En esta tesitura, como es del conocimiento, el municipio de Minatitlán, es continuamente afectado por el temporal de lluvias, por ser éste, uno de los que mayor volumen de agua registra por esta clase de fenómeno natural en la Entidad, causando derrumbes y desgajamientos de cerros, así como desbordamientos y ensanchamiento de ríos y arroyos, debido al gran lecho fluvial que se desprenden de las torrenciales lluvias que abaten en este municipio y sus alrededores.

Por tal motivo, la presente iniciativa de acuerdo, surge en función a este fenómeno natural que afecta a la población del municipio de Minatitlán, específicamente por el desbordamiento y ensanchamiento del arroyo "De los Copales" provocados año con año por al gran flujo de agua que en temporadas de lluvias éste transporta. Es de mencionar, que este arroyo por ser la principal vía de evacuación fluvial del municipio, debe contar con las condiciones idóneas para expandir la seguridad no solo a los pobladores del municipio, sino de todas las personas que transitan a sus alrededores, quedando como antecedente, aquel ciclón devastador de octubre de 1959, que dejó a la mitad de la población de Minatitlán sepultada, y que tal vez, los daños hubieran sido de menor índole, si este arroyo "De los Copales" hubiera tenido las condiciones propias de seguridad, sin embargo no lo fue así, y las consecuencias fueron catastróficas.

A lo anterior, considero que no se necesita esperar otro desastre natural como lo fue aquel, en el año de 1959, para implementar medidas de protección sobre este gran cauce, que garanticen la seguridad de los pobladores, aludiendo que pese a las obras de compensación que realiza la Compañía establecida en el territorio de Minatitlán, "Peña Colorada", consistentes en obras de limpieza y desazolve sobre este arroyo principal, estas se ven rebasadas por el gran torrente provocado por las lluvias que abaten a este municipio y a sus alrededores, ensanchándolo cada vez más y sobre todo, generando desbordamientos que limitan las actividades de miles de personas, poniéndolas además, en claro estado de vulnerabilidad física.

Ante este panorama, resulta inaplazable realizar medidas de seguridad en este multicitado arroyo, con el ponderante fin, de garantizar la seguridad e intereses de los habitantes, vecinos y toda clase de turistas del municipio de Minatitlán, por ello y como su representante ante esta soberanía, hoy presento esta iniciativa de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo la construcción de un muro de contención de aproximadamente 1500 metros de longitud, en la cabecera Municipal de Minatitlán, Colima, iniciando en la boca del arroyo "De los Copales" y que concluya al en las faldas del cerro "La Lomita".

Por último, estoy convencido que con la aprobación de la presente iniciativa de acuerdo, además de verse reflejado el refrendo al compromiso de esta Soberanía con nuestra sociedad Colimense, esta obra, beneficiará a miles de personas expandiendo la esfera de protección en su seguridad y patrimonio.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de:

ACUERDO

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, de manera respetuosa exhorta a la Comisión Nacional del Agua por conducto de su Dirección Local en Colima para que en el ámbito de su competencia en términos de lo previsto por las fracciones IX y X del artículo 9, de la Ley de Aguas Nacionales, destinen los fondos económicos necesarios para la realización de la obra pública consistente en el levantamiento de un muro de contención de aproximadamente 1,500 metros de longitud, en la cabecera Municipal de Minatitlán, Colima, iniciando en la boca del arroyo “De los Copales” y que concluya en las faldas del cerro “La Lomita”, cumpliendo las condiciones técnicas y de construcción que garanticen la seguridad de la población del municipio de referencia.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, se instruye al Oficial Mayor del Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Titular de la Dirección Local en Colima de la Comisión Nacional del Agua, para los efectos legales correspondientes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, col., 06 de agosto de 2014. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Óscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Moreno Gutiérrez, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. José Verduzco Moreno, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. Arturo García Arias, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Esteban Meneses Torres, Dip. Heriberto Leal Valencia. Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Gracias Diputado. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado Manuel Palacios Rodríguez, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del propio Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola vez hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. No habiendo intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que el documento es aprobado por mayoría

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el Diputado Manuel Palacios Rodríguez e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el uso de la voz el Diputado José Verduzco.

DIP. VERDUZCO MORENO. Con su permiso Diputado presidente. Integrantes de la Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña, damos la bienvenida a los productores de plátano, a nuestro amigo Francisco Hueso, al Secretario de Desarrollo Rural y a todo el público que nos hace el favor de honrarnos con su presencia.

Los suscritos Diputados José Verduzco Moreno, Noé Pinto de los Santos Arturo García Arias, Esperanza Alcaraz Alcaraz, Martín Flores Castañeda, José Antonio Orozco Sandoval, Óscar A. Valdovinos Anguiano, Crispín Gutiérrez Moreno, Manuel Palacios Rodríguez e Ignacia Molina Villarreal integrantes

del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Esteban Meneses Torres y Heriberto Leal Valencia integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I, 83, fracción I, 84, fracción III, y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, respectivamente, domiciliadas en el Estado a efecto de que emitan una Declaratoria de Emergencia por los daños causados por la tromba acontecida aproximadamente a las 17:00 horas del 23 de julio de 2014 en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, se han generado las condiciones agrícolas para el cultivo de plátano y papayo, así como para la implementación de estructuras de agricultura protegida, lo que ha permitido el desarrollo de esa región costera y en consecuencia, el reflejo de los beneficios sociales y económicos para los trabajadores del campo en este tipo de plantaciones.

De igual forma, es conocido que por las condiciones geográficas del Estado, sus diversas regiones están expuestas a diferentes fenómenos meteorológicos que someten a la vulnerabilidad de la entidad y, con ello, a su infraestructura y producción agropecuaria, entre otros tantos sectores.

Cabe mencionar, que los frutos de plátano y papayo, por sus características singulares, resultan sumamente frágiles y vulnerables ante cualquier fenómeno meteorológico que se presente, por lo que requieren de especial atención y cuidado para su cosecha, acciones que llevan a cabo los agroproductores colimenses.

En este sentido, el día 23 de julio del presente año, los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, fueron objeto de una Tromba, esto es, presencia de fuertes lluvias y vientos que causaron afectaciones graves en por lo menos 1,522 hectáreas de cultivos de plátano y papayo, así como a estructuras de agricultura protegida, mismas que se hace necesario atender de manera integral, en beneficio del sector rural.

Con respecto al suceso natural señalado, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer el pronóstico general a las 6:00 hora del día 23 de julio del año en curso, a través del Servicio Meteorológico Nacional, señalando que se esperaban tormentas fuertes en la mayor parte del país por el paso de las ondas tropicales 15 y 16 y canales de baja presión.

Al día siguiente, el 24 de julio de este año, siendo las 08:00 horas, se recibió la información de las precipitaciones pluviales y de los fuertes vientos que oscilaron entre los 60 y 100 kilómetros por hora en comunidades de Tecomán, los que sin duda dejará efectos negativos, particularmente en el campo.

Derivado de la presencia del fenómeno meteorológico, el mismo día 24 de julio se realizó un monitoreo de daños para conocer la magnitud de afectación en los cultivos, reportándose daños principalmente en el cultivo de plátano en el municipio de Tecomán, Colima. Con base en lo anterior, se realizó una vista de campo el día de viernes 25 de julio, con personal de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en coordinación con personal de la aseguradora PROAGRO, para la verificación de daños en el municipio antes señalado.

Asimismo, el viernes 25 de julio de esta anualidad se integraron tres brigadas para el levantamiento específico de los daños, integradas por personal de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Colima (CESAVECOL), la Contraloría del Gobierno del Estado de Colima, el H. Ayuntamiento de Tecomán y la aseguradora PROAGRO, además de que con esta última el día 04 de agosto se realizó la visita para muestrear en diversos puntos de acuerdo como lo marca la mecánica operativa 2014.

Por lo anterior, el propósito del presente instrumento consiste fundamentalmente en resarcir la capacidad productiva del sector a la brevedad y evitar mayores daños por efectos colaterales como falta de empleo y problemas de abasto en insumos y productos en las localidades del territorio estatal y nacional.

Ante esta situación, los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, conscientes de nuestra responsabilidad y sensibles ante las problemáticas que afectan a la sociedad, de manera particular, por los daños causados a los cultivos de plátano y papayo, así como a las estructuras de agricultura protegida de los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo, por la tromba acontecida el pasado 23 de julio de 2014, exhortamos respetuosamente al Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, respectivamente, radicadas en el Estado a efecto de emitan una Declaratoria de Emergencia, con el fin de que se radiquen recursos económicos extraordinarios destinados a acciones concretas para resarcir los daños causados por el fenómeno natural de referencia, estableciendo apoyos emergentes a los productores de plátano y papayo, así como a los propietarios de las estructuras de agricultura protegida, de los citados municipios. Igualmente, se sirva incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por las afectaciones antes señaladas.

Lo anterior, sin lugar a dudas habrá de beneficiar y reactivar al campo colimense en aquellos municipios y aminorar los daños causados por la tromba del pasado 23 de julio, incidiendo en mantener una estabilidad económica tanto en la cadena productiva de los cultivos afectados, como en el sustento de las familias que dependen del trabajo que se genera en ese sector agrícola.

De igual forma, se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que en auxilio de los productores afectados por el fenómeno natural citado, coadyuve en la integración de expedientes y gestiones necesarias a fin de lograr la emisión de la Declaratoria de Emergencia objeto del presente instrumento.

Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de este H. Congreso del Estado el siguiente Proyecto de ACUERDO.

No quiero antes de concluir la lectura de este dictamen dejar de reconocer el trabajo que viene haciendo el representante de los productores de plátano, de la zona de la costa, nuestro amigo Francisco Hueso y desde aquí pedirle que sea el portador, con todos nuestros amigos productores y los jornaleros, de que el Congreso no los dejara solos, que siempre estaremos atentos de lo que sucede y ver de que manera podemos coadyuvar a recuperar la capacidad productiva, seguro estoy que nuestros compañeros Diputados apoyarán esta causa. Bienvenido Francisco y reconocer nuevamente su trabajo, le pido al Presidente de la Mesa Directiva nos permita que continúe con la lectura de este dictamen al Diputado Noé Pinto de los Santos. Muchas gracias.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. A usted Diputado, para el uso de la voz el Diputado Pinto, por favor.

DIP. PINTO DE LOS SANTOS. Gracias Diputado José Verduzco Presidente de esta Comisión, de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, con el permiso Diputado Presidente, integrantes de la Mesa Directiva.

A C U E R D O:

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, respectivamente, radicadas en el Estado a efecto de que emitan una Declaratoria de Emergencia, con el fin de que se radiquen recursos económicos extraordinarios destinados a acciones concretas para resarcir los daños causados a los cultivos de

plátano y papayo, así como a estructuras de agricultura protegida, por la tromba ocurrida el 23 de julio de 2014, en los municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán estableciendo apoyos emergentes a los productores de dichos cultivos, así como a los propietarios de las referidas estructuras de agricultura protegida. Igualmente, se sirva incorporar al Programa de Empleo Temporal a los jornaleros agrícolas que han perdido su empleo por las afectaciones antes señaladas.

SEGUNDO.- Este Honorable Congreso del Estado exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Colima, para que en auxilio de los productores afectados por el fenómeno natural citado en el resolutivo anterior, coadyuve en la integración de expedientes y gestiones necesarias a fin de lograr la emisión de la Declaratoria de Emergencia objeto del presente instrumento.

TERCERO.-Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior al Titular del Poder Ejecutivo de la Federación, así como a los Titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social, a la Comisión Nacional del Agua, así como a sus Delegaciones y Dirección Local, respectivamente, radicadas en la entidad, así como de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para los efectos legales conducentes.

Los que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. Atentamente. Colima, Col., 06 de agosto de 2014. Dip. Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario y Pesquero. José Verduzco Moreno, Dip. Noé Pinto de los Santos, Dip. Arturo García Arias, Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno, Dip. José Antonio Orozco Sandoval, Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano, Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Dip. Esteban Meneses Torres y Dip. Heriberto Leal Valencia. Es cuanto Diputado Presidente.

Yo quiero también, antes si me lo permiten, hacer un reconocimiento a la Secretaría de Desarrollo rural que este aquí presente su titular, gracias Ing. Zamarroni, nuevamente sea bienvenido usted a esta su casa, por todo el esfuerzo que han hecho conjuntamente con SAGARPA, un saludo también su Delegado, y que en ese sentido han estado coadyuvando conjuntamente con algunas otras dependencias para darle en lo posible y atendiendo esas necesidades lo conducente a todos los productores afectados del plátano, por esta situación que el día 23 de julio, tuvo una situación climatológica ahí en Tecomán y que siempre ha estado presente en esta situación, lógicamente por indicaciones y por instrucciones de nuestro amigo el Gobernador del Estado, el Lic. Mario Anguiano Moreno, y por supuesto a nuestro amigo Francisco Hueso, que ha estado atinadamente dirigiendo los destinos de este Comité y de esta asociación de plataneros, aquí en el estado y pacífico y centro también y que a pesar de las dificultades económica y a veces climáticas, ha estado muy presente, agradezco que nos hayan invitado el día de ayer, a presidir esta reunión, a conocer también de manera personal las necesidades y las afectaciones y el padecimiento y sufrimiento que están haciendo, llevando acabo ahí, los productores de plátano, aquí en nuestro Estado y que principalmente afectó estos tres municipios. Estamos con ustedes, por supuesto para apoyarlos y respaldarlos. Gracias es todo Diputado Presidente.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Noé Pinto de los Santos. Y con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó el Diputado José Verduzco Moreno y el Diputado Noé Pinto de los Santos, recordándoles que dentro de la discusión de dicho documento deberán sujetarse a lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala que hablarán por una sola ocasión hasta cuatro Diputados, dos en pro y dos en contra. Tiene la palabra el parlamentario que así desee hacerlo. No habiendo intervención alguna, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento en cuestión.

DIP. SRIO. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.

DIP. PDTE. ANTERO VALLE. Muchas gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por nuestros pares parlamentario, José Verduzco Moreno y Noé Pinto de los Santos e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Agradeciendo la presencia del Secretario de Desarrollo Rural, Adalberto Zamarroni, y al Dirigente de los productores de plátano, Francisco Hueso. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, en primer término compañeras y compañeros Diputados, se les extiende una invitación para la primera sesión parlamentaria, o del Parlamento Juvenil que se llevará a cabo este próximo martes 12 de agosto a partir de las 11 horas. Es importante su asistencia por la trascendencia del contenido de dicho parlamento y así mismo, señoras y señores Diputados, se les convoca a la sesión pública ordinaria a celebrarse ese mismo día martes 12 de agosto del año en curso, a partir de las 13 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día, les solicito amablemente a todos los presentes ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciocho horas con seis minutos del día seis de agosto del año 2014, declaro clausurada la presente sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes.